

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

33ª REUNION — 14ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 4 Y 5 DE 1936

Presidencias de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Marcelo Eduardo López Arias, Rafael Manuel Pascual y Miguel Alberto Balestrini

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALOVICH, Eduardo Antonio
ABAN, Gloria del S.
ABASTO, Ángel Leónidas
ABHAGGLE, Carlos Enrique
ACEVEDO, Sergio Edgardo
AFARCIA, Martha Carmen
ALESSANDRO, Darío Pedro
ALLENDE, Alfredo E.
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTERACHI, Miguel Ángel
ÁLVAREZ, Carlos Raúl
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando M.
ARAMBURU, Guillermo Raúl
ARIAS, César
ATANASOF, Alfredo Néstor
AVILA, Eduardo Carlos
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliانا
BALESTRINI, Miguel Alberto
BAUTER, Carlos Mario
BANTAS de MOREAU, María del C.
BARBERIS, Edgardo Ángel
BARRIONUEVO, Eduardo Ernesto
BARRIOS, Luis Américo
BARRIOS ARRECHEA, Ricardo Alfredo
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge E.
BENZÍ, María Cristina de los Angeles
BIANCULLI, Leticia
BIZZOTTO, Heana
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDA, Osvaldo
BORDENAVE, Marcela Antonia
BORDIN, Hugo Antonio
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana
BRAVO, Alfredo Pedro
BRITOS, Oraldo Norvel
BRUNELLI, Naldo Raúl Adalberto
BULACIO, Rafael Alberto
BULERICH, Patricia
CABALLERO MARTÍN, Carlos Aurelio
CABRÓN, Juan Carlos
CAFFERATA NORES, José Ignacio
CAPIERO, Juan Pablo
CAILLET, Carmen del Rosario
CALLABA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar

CAMARA, Mario Ángel
CAMBARERI, Fortunato Rafael
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARBAJAL, Arnoldo Dante
CARCA, Elisa Beatriz
CARDOSO, Marta Elena
CARRARA, Emilio Eduardo
CARRÍO, Elisa María Avolina
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS de MARÍN, Paul Azucena
CHICA RODRÍGUEZ, Juan José
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CUCFAGA, Melchor René
das NEVES, Mario
DELLA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Liliانا del Carmen
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ LOZANO, Julio César
DÍAZ MARTINEZ, Jorge Raúl
DIGNO, Roberto Secundino
DOMINA, Esteban Alberto
DOMÍNGUEZ, Dolores Carmen
DOMÍNGUEZ, Lorenzo Sebastián
DRAGICEVIC, Carmen Nilda
DRISALDI, María Rita
DUFOU, Pedro Alfredo
DUMÓN, José Gabriel
ESCALANTE ORTIZ, Herminia Elsa
ESTEVEZ BOERO, Guillermo Emilio
ESTRADA, Arnoldo D.
FADEL, Mario Nallib
FABRISIN, Carlos Alberto
FAYAD, Víctor Manuel Federico
FERNÁNDEZ, Alberto Manuel
FERNÁNDEZ de COMEES, Elsa A.
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GABRIELLI, Rodolfo Federico
GALANTE, Pedro Jorge Roque
GALMARINI, Ferrando Nicolás
GARAY, Nicolás Alfredo
GARRE, Nilda Celia
GATTI, Héctor Ángel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMENEZ, Ramón Francisco
GODOY, Norma
GOLLY, Eduardo Ceferino
GOLPE, Carlos Horacio
GONZÁLEZ, Antonio Erman

GONZÁLEZ, María Luisa
GONZ, María Virginia
GORINI, Floreal Edmundo
GRANADOS, Daice
GUEVARA, Cristina
GUDINO, Amalia Ermelinda
GUTIERREZ, Gustavo Eduardo
HAQUIM, Carlos Guillermo
HERREIRA, Alberto
ILLIA, Martín Arturo
IBRAZADAL, Liliانا María del Carmen
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
KESSLER, Ana Raquel
LAFFERRIERE, Ricardo Emilio
LAMOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LEGUIZAMÓN, María Laura
LENCE, Héctor
LIPONETZKY de AMAYET, Sara G.
LOPEZ, Elsa Isabel
LOPEZ, José Augusto
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
MACEDO, Heracio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MARTINEZ, Esteban
MARTINEZ, Manuel Luis
MARTINEZ, Silvia Virginia
MARTINEZ GARBINO, Emilio Raúl
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MAURETTE, Fernando Wenceslao
MELOGNO, Elsa
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma Amelia
MONDELO, Lidia Elizabeth
MONDINO, Eduardo René
MONTIEL, Sergio Alberto
MORELLO, Emilio Pedro
MOSSELLO de BENZO, María del C.
MOTHE, Félix Arturo
MÜLLER, Mabel Hilda
MURIEL, Néstor Jorge
MUSA, Laura Cristina
NATALE, Alberto Adolfo
NEDER, Jorge Humberto
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario

OBBARRO, Luis Manuel
 OCAMPOS, Jorge Armando
 OLIMA, Juan Carlos
 PANDO, Ana María
 PARAJÓN, José María
 PARENTELLA, Irma Fidela
 PARRA, Nélida del Carmen
 PASQUAL, Rafael Manuel
 PASQUALINI de ACOSTA, Elida Esther
 PASSO, Juan Carlos
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELÁEZ, Victor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PEREYRA de MONTENEGRO, María G.
 PEREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio Francisco
 PERRINI, Giocenda Eulalia
 PEZOA, Juan Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRE, Alberto Reinaldo
 PIÑÓN ÁVILA, Celia Isabel
 PIRIZ, Juan Carlos
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRUYAS, Tomás Rubén
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 RAMPI, Pascual Ángel
 REMEDI, Lux Elizabeth
 RICO, Aldo
 RIVADERA, Marta Liliana
 ROBERTI, Raquel Griselda
 ROBLES, Miguel Ángel Ernesto
 RODIL, Rodolfo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJO, Rubén Darío
 ROLLANO, Eduardo Daniel
 ROY, Irma

RUBEO, Luis
 RUBINI, Mirta Elsa
 SAGGESE, Néstor Mario
 SALIM, Fernando Omar
 SALINO, María Antonia
 SALTO, Julio Francisco José
 SAMPIETRO, Darcí Beatriz
 SÁNCHEZ, Mary
 SANTANDER, Mario Armando
 SAT, Oscar
 SCRIMIZZI, Gloria Elida
 SCHIARETTI, Juan
 SEBASTIANI, Claudio Augusto
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando Exequiel
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA, Edmundo del Valle
 SPERATTI, Alfredo Ramiro
 STORANI, Federico Teobaldo Manuel
 STUBBIN, Marcelo Juan Alberto
 SUÁREZ, Juan Carlos
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TOGNI de VELY, Adriana Leonor
 TOLOMEO, Leonor Ester
 TOMA, Miguel Ángel
 TRETTEL MEYER, Raúl A.
 TULIO, Rosa Ester
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VAZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENSENTINI, Marcelo Edmundo
 VERAMENDI, Juan Carlos
 VIANA, Mariano Roberto
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 VILCHE, Carlos Alberto
 VILLALBA, Alfredo Horacio
 VIQUEIRA, Horacio Gustavo
 VITAR, José Alberto
 ZUCCARDI, Cristina

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

ISEQUILLA, Amalia
 CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTES, CON LICENCIA:

ÁLVAREZ ECHAGÜE, Raúl Ángel
 GIANNI, Gloria María Cristina
 LLOPIS, Enrique Raúl
 MAQUEDA, Juan Carlos

AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE
DE APROBACION
DE LA HONORABLE CAMARA:

ADAIME, Felipe Teófilo
 ARAGONES de JUAREZ, Mercedes M.
 BRESER, Adalberto Edgardo
 CASARI de ALARCIA, Leonor
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
 HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
 MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel Alberto
 RUIZ PALACIOS, José David Alberto
 ZAVALIA, José Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ALLENDE, Oscar Eduardo
 ÁLVAREZ, Carlos Alberto
 BRAVO, Leopoldo Alfredo
 CLOSS, Ramón Alberto
 GUTIÉRREZ, Diana Bárbara
 GUZMÁN, María Cristina
 JOGA, Vicente Bienvenido
 MENEM, Carlos Omar
 SARQUIZ, José Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la Sesión Preparatoria (43ª reunión), de fecha 29 de noviembre de 1993.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3044.)
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Pepe de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento de los asuntos a los que se refieren los números 10 y 11 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3044.)
3. Moción del señor diputado Pepe de que se traten sobre tablas los asuntos a los que se refieren los números 10 y 11 de este sumario. Se aprueba. (Página 3044.)
4. Diario de Sesiones. (Pág. 3045.)
5. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 3045.)
6. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 3046.)
7. Diferimiento del término reglamentario destinado a homenajes. (Pág. 3046.)
8. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 3046.)

9. Pedido de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de tratamiento sobre tablas. (Pág. 3048.)

- I. Moción del señor diputado Dómina de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 12 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3048.)
- II. Moción del señor diputado Gorini de preferencia para el proyecto de declaración del que es coautor por el cual se expresa la necesidad de preservar la propiedad del Banco de la Nación Argentina por parte del Estado (2.142-D-96). Es retirada. (Página 3051.)
- III. Moción del señor diputado Corchuelo Blasco de preferencia para el proyecto de ley del que es coautor por el cual se declara de interés histórico al Museo Nacional del Petróleo, ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut (2.346-D-96). (Se aprueba. (Pág. 3052.)
- IV. Moción del señor diputado Abalovich de preferencia para el proyecto de resolución de su autoría por el cual se solicitan in-

96) por el que se expresa reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el 175º aniversario de su creación. Se sanciona como resolución. (Pág. 3148.)

LXXIII. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 14.I. a 14.LXXII. de este sumario. Se sancionan. (Página 3150.)

15. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se declara área de conservación al inmueble denominado Campo General Belgrano, ubicado en el departamento de Capital de la provincia de Salta (11-S.-95). Se sanciona. (Pág. 3150.)

16. Consideración de los proyectos de resolución de la señora diputada Guzmán (73-D.-96) y del señor diputado Dellepiane (122-D.-96) por el que se crea en el ámbito de la Honorable Cámara una comisión especial investigadora de las actividades comerciales desarrolladas en el país por IBM Argentina S.A. Se sanciona un proyecto de resolución que unifica ambas iniciativas. (Pág. 3152.)

17. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Das Neves y otros por el que se crea en el ámbito de la Honorable Cámara una comisión investigadora de seguimiento de los ilícitos producidos en la Administración Nacional de Aduanas (4.545-D.-96). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 3158.)

18. Moción de orden formulada por el señor diputado Caffero de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para el proyecto de ley que es coautor (4.173-D.-96) y para el proyecto de ley del señor diputado Bravo (A.P.) y otros (4.419-D.-96) sobre exención de gravámenes a las drogas y medicamentos para el tratamiento de los enfermos de sida. Se aprueban ambas proposiciones. (Página 3162.)

19. Moción de orden formulada por el señor diputado Stubrin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de resolución de su autoría por el que se expresa pesar por la muerte de civiles como consecuencia de los bombardeos irakíes en la región de Kurdistán (4.870-D.-96). Es rechazada. (Pág. 3163.)

20. Consideración de los proyectos de resolución de los señores diputados Martínez (S. V.) y Estévez Boero (4.669-D.-96) y Polo (4.671-D.-96), y de los proyectos de declaración de los señores diputados Saggese (4.712-D.-96) y Galmarini (4.789-D.-96) por los que se expresa beneplácito por el desempeño de los integrantes del equipo argentino que

participó en los Juegos Paraolímpicos que se desarrollaron en Atlanta, Estados Unidos de América. Se sanciona un proyecto de resolución que unifica dichas iniciativas. (Pág. 3165.)

21. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 24.744, de Contrato de Trabajo (158-D.-95). Se sanciona con modificaciones, luego de rechazarse una moción de orden formulada por el señor diputado Alsogaray de que el asunto vuelva a comisión. (Pág. 3168.)

22. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, de Familia, Mujer y Minoridad y de Legislación del Trabajo en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (35-P.E.-95 y 27-P.E.-96), de los señores diputados Britos (2.690-D.-96), Flores y otros (3.875-D.-96), Alessandri y otros (3.876-D.-96), Coñi y otros (3.878-D.-96), Britos y otros (3.882-D.-96), Alvarez (C. A.) (3.889-D.-96), Villalba y otros (3.904-D.-96), Rico y Morello (3.916-D.-96), Carrió (3.923-D.-96), Alvarez García (3.924-D.-96), Pernasetti y Storani (3.960-D.-96), Martínez Carhino (4.010-D.-96) y Passo (4.063-D.-96); en los proyectos de resolución de los señores diputados Gorini y otros (3.860-D.-96) y Alvarez García (3.883-D.-96), y en los proyectos de declaración de los señores diputados Villalba y otros (3.906-D.-96), Polo (3.912-D.-96) y Cardoso (4.013-D.-96), sobre régimen de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia. Se sanciona con modificaciones el dictamen de mayoría. (Pág. 3194.)

23. Apéndice.

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 3233.)

B. Asuntos entrados:

I. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Página 3256.)

II. Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 3256.)

III. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 3258.)

IV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 3259.)

V. Dictámenes observados. (Pág. 3273.)

VI. Comunicaciones de comisiones. (Página 3273.)

VII. Comunicaciones de señores diputados. (Pág. 3274.)

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 3275.)

IX. Peticiones particulares. (Pág. 3289.)

X. Proyectos de ley. (Pág. 3292.)

XI. Proyectos de resolución. (Pág. 3294.)

XII. Proyectos de declaración. (Pág. 3317.)

XIII. Licencias. (Pág. 3332.)

C. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1. Pernasetti. (Pág. 3333.)

2. Corchuelo Blasco. (Pág. 3338.)

tiempo suficiente para la confección de los diplomas y las medallas. De todas maneras se adoptarán las medidas pertinentes para que ese acto pueda realizarse a la brevedad.

Se va a votar el proyecto de resolución.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de resolución¹.

Se harán las comunicaciones pertinentes.

21

MODIFICACION DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO (Orden del Día Nº 513)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se modifica la ley 20.744, de contrato de trabajo, y tenidos a la vista el mensaje 776 del Poder Ejecutivo por el cual se comunica el dictado del decreto 773, del 15 de julio de 1996, mediante el cual se deroga el decreto 1.477/89 que incorpora el artículo 105 bis a la ley 20.744, de contrato de trabajo, en lo relacionado con la eliminación de vales alimentarios o cajas de alimentos; y los proyectos originados por los señores diputados Brunelli y otros, Borda y otros, Rico y Morello, Ruiz Palacios y Gorini y otros; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 103 de la ley 20.744, por el siguiente:

Artículo 103: *Concepto*. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.

Art. 2º — Agrégase como artículo 103 bis de la ley 20.744, el siguiente:

Artículo 103 bis: *Beneficios sociales*. Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de

naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:

- a) Los servicios de comedor de la empresa;
- b) Los vales del almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo que fije la autoridad de aplicación;
- c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgados a través de empresas habilitadas por la autoridad de aplicación, hasta un tope máximo de un veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de cada trabajador comprendido en convenio colectivo de trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de trabajadores no comprendidos;
- d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia habilitada, médico u odontólogo, debidamente documentados;
- e) La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas;
- f) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilice la trabajadora con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones;
- g) La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del período escolar;
- h) El otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización;
- i) El comodato de casa-habitación de propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda.

Art. 3º — Modificaciones al artículo 105 de la ley 20.744:

Artículo 105: *Forma de pago. Prestaciones complementarias*. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias.

Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador, con excepción de:

- a) Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance;

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 3250).

- b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado en base a kilómetros recorridos, conforme los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro por la DGI;
- c) Los viáticos de viajeros de comercio acreditados con comprobantes en los términos del artículo 6º de la ley 24.241, y los reintegros de automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso anterior;
- d) Las sumas que se abonaren en conceptos de fallas de cajas a los cajeros y al personal cuya tarea habitual sea la de recibir cobranzas o la de efectuar pagos.

Art. 4º — Agrégase como artículo 223 bis de la ley 20.744, el siguiente:

Artículo 223 bis: Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables a empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributarán las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661.

Art. 5º — Establécese una contribución patronal del 19 % sobre el beneficio social indicado en el inciso c) del artículo 103 bis de la ley 20.744, con destino al sistema de asignaciones familiares.

Art. 6º — Los gastos en que el empleador incurra para el otorgamiento de los beneficios sociales indicados en los incisos b), d), f), g) y h) del artículo 103 bis de la ley 20.744, no podrán exceder del veinte por ciento (20 %) de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, con exclusión de todo adicional variable o el equivalente a cuatro (4) AMPOS, lo que resulte menor.

Art. 7º — A partir de la fecha de vigencia de la presente ley los empleadores que venían otorgando va'es alimentarios o cajas de alimentos a sus dependientes deberán mantenerlos en los términos aquí establecidos.

Art. 8º — Deróguense los decretos 773/96, 848/96 y 849/96.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 14 de agosto de 1996.

Oscaldo Borda. — Alfredo N. Atunaso. —
Oraldo N. Britos. — Eduardo O. Camarero. — José L. Castillo. — Juan J. Chica.
Rodríguez. — Dolores S. Domínguez. —
Rodolfo M. Gazia. — Lorenzo A. Pepe.
— María A. Salino.

En disidencia parcial:

Horacio F. Pernasetti. — Alfredo E. Allende. — Alejandro M. Nieva.

INFORME

Honorable Cámara:

Hacia 1989 se incorporaron a nuestra legislación positiva, a través del artículo 105 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, los beneficios de "cajas de asistencia a la canasta familiar" o "vales alimentarios" que fueron ideados como una suerte de auxilio económico para el sector asalariado.

Tal iniciativa desde un comienzo resistida por un amplio espectro de la sociedad atento a que la misma en la realidad implicaba una real y tangible reducción de los aportes y contribuciones.

Sin embargo, a pesar de las reservas indicadas, el sistema, aun con sus imperfecciones y con el correr del tiempo, se ha ido consolidando atento a que ha demostrado su idoneidad a los fines de mantener el poder adquisitivo de los salarios.

Tal estado de cosas ha sido radicalmente modificado por decreto 773/96 que deroga frontalmente aquel sistema provocando tal decisión serios reparos y cuestionamientos por parte del sector trabajador que, a pesar de las promesas de los funcionarios, observa con alarma la puesta en marcha de una medida que pone en grave riesgo la tangibilidad de sus ingresos.

Ante tal situación, y en la inteligencia que se debe brindar a los trabajadores una respuesta legislativa adecuada que posibilite el mantenimiento de su situación remuneratoria, hemos elaborado un discurso sobre el tema que nos convoca y que ponemos a vuestra consideración.

Oscaldo Borda.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 1º de noviembre de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 103 de la ley 20.744 por el siguiente:

Artículo 103: *Concepto.* A los fines de esta ley se entiende por remuneración a la contraprestación que debe percibir el trabajador por realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a las órdenes del empleador. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.

Art. 2º — Agrégase como artículo 103 bis de la ley 20.744, el siguiente:

Artículo 103 bis: *Beneficios sociales.* Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de natu-

raleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por intermedio de terceros, que reconocen como causa a un hecho o circunstancia ajena a la relación laboral y que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:

- a) Los servicios de comedor interno de la empresa;
- b) Los vales del almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo, que fije la autoridad de aplicación;
- c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgados a través de empresas habilitadas por la autoridad de aplicación, hasta un tope máximo de un veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de cada trabajador comprendido en convenio colectivo de trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de trabajadores no comprendidos. Podrá tomarse como base de cálculo la remuneración con el valor proporcional mensual que represente el sueldo anual complementario;
- d) El reintegro de gastos de medicamentos, previa presentación de comprobantes emitidos por médicos y/o farmacia habilitada;
- e) La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo;
- f) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilizara la trabajadora con hijos de hasta seis años de edad;
- g) El pago de servicios médicos y/u odontológicos, que se den al trabajador y/o su familia a cargo que asumiera el empleador;
- h) Las primas y premios de los seguros de vida y/o incapacidad total o permanente, a cargo del empleador;
- i) La provisión gratuita de uso de automóvil de propiedad del empleador, cuando estuviere afectado al trabajo;
- j) La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del período escolar;
- k) El otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización;
- l) El pago de gastos de sepelio del trabajador, si no tuviera cobertura por la respectiva obra social;

- ll) El pago de traslado del trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo y regreso en medio público de transporte, colectivo, tren o subterráneo, con exclusión de automóviles taxímetros, exclusivamente por sistemas que aseguren el destino de los fondos a través del uso de tarjetas u otros mecanismos emitidos por empresas especializadas, con exclusión de la entrega de dinero en efectivo, y mediante el archivo de las facturas respectivas.

Art. 3º — Agrégase como artículo 223 bis de la ley 20.744, el siguiente:

Artículo 223 bis: Se considerará prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo.

Art. 4º — Los beneficios y prestaciones referidos en los artículos anteriores no serán considerados ingresos del trabajador a los efectos previsionales.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo nacional podrá reglamentar los requisitos y condiciones en que deberán otorgarse los beneficios sociales y las prestaciones no remunerativas antes indicadas.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

CARLOS F. RUCKAUF.
Edgardo R. Piuzei.

OBSERVACIONES

1

Buenos Aires, 28 de agosto de 1996.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De mi mayor consideración:

Señor presidente, de acuerdo a lo normado por el artículo 95 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, vengo a plantear observaciones al dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo que fuera publicado en el Orden del Día Nº 513, cuya fundamentación realizaré a viva voz en el recinto.

Acompaño copia del Orden del Día Nº 513.

Saludo a usted con mi mayor respeto.

Mary Sánchez.

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo contenido en el Orden del Día N° 513. Gorini. (113-D.O.-1996.)

2

Buenos Aires, 30 de agosto de 1996.

A *señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados*, señor Alberto R. Pierri,

S/D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en el plazo previsto por el artículo 15 del Reglamento de la Cámara con el objeto de formular observaciones al dictamen impreso en el Orden del Día N° 513, conforme las argumentaciones que se vierten seguidamente:

Las razones que motivan las observaciones al dictamen referido precedentemente, estriban en tres conceptos que consideramos esenciales contenidos en la amplia órbita del derecho laboral, la pacífica construcción jurisprudencial y doctrinaria, como plexo tutelador de las garantías de los trabajadores, y que el proyecto reseñado viola flagrantemente, a saber:

- a) El carácter remuneratorio del rubro contenido bajo la denominación vales alimentarios y/o canastas de alimentos;
- b) El pago de los mismos en dinero;
- c) El recorte en las contribuciones patronales que prevé el artículo 4º del dictamen.

La primera observación que deducimos parte de considerar la incidencia de los preceptos constitucionales que atañen a la comprensión y fundamentos de la problemática que trata este proyecto. El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, recientemente revalidado por la Comisión Reformadora que sesionó en Santa Fe en 1994 constituye la norma madre en todas las cuestiones que atañen al derecho del trabajo en su conjunto. Este precepto, nacido al calor de los ideales proclamados por el denominado constitucionalismo social, contempla principios rectores, cuya sola presencia nos anuncian las diferencias y contradicciones sociales existentes en toda sociedad capitalista. Por lo tanto, la inserción de un plexo normativo protectorio, en el universo de una Constitución por tradición liberal y prescindente, indica una situación, en este caso de los trabajadores en situación de dependencia laboral, de hiposuficiencia, y por ende, conformando un plano de debilidad social frente al sector capitalista-empresarial. La verificación de este hecho notorio, no sólo provocó la incorporación en el más alto rango normativo de garantías tutelares que circunscriban a un ámbito de mayor equidad las relaciones jurídicas de trabajo, sino que, tales mandamientos constitucionales fueron, tal como queda expresado más arriba, revalidados por la Convención Constituyente que reformó la Carta de 1853, lo que en principio estaría revelando la voluntad de validar su vigencia y fuerza legal, en un contexto social en donde las contradicciones sociales lejos de desaparecer, van presurosamente acrecentándose.

A nadie escapa, que este plexo de principios protectores del derecho del trabajo, de las actividades sindicales y la seguridad social, es y ha sido en las más diversas ocasiones y oportunidades, bastardeado, retaceado, deformado y hasta violado ostensiblemente, aun por aquellos que tienen la obligación institucional de velar por su plena aplicabilidad. Tampoco es un secreto que muchas veces la vigencia real de sus mandamientos, dependa de la fuerza concreta que despliegue en las luchas sociales los sujetos comprendidos en su órbita de aplicabilidad, en otras palabras, se trata de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. Puede decirse, con plena autoridad, que incluso su incorporación como norma constitucional, se debió en parte a esas luchas por lo que constituye junto a las normas laborales tuitivas, verdaderas conquistas de los trabajadores.

Pues bien, este artículo propicia una serie de presupuestos básicos que no pueden ser válidamente alterados, so pena de incurrir en flagrante violación constitucional. Cuestión grave, que se potencia cuando quien propende el incumplimiento es nada más y nada menos que el propio Estado. En efecto, la norma que se cuestiona, lesiona la médula de la relación de trabajo, en cuanto afecta el principio rector de la intangibilidad del salario. Es el propio Parlamento nacional quien mediante el proyecto en consideración revoca en el texto normativo, la garantía constitucional de la retribución justa, concepto amplio que engloba el principio mencionado precedentemente, a partir de concederle al rubro en cuestión un pretendido carácter no remunerativo, lo que constituye un grosero desconocimiento de la paciente arquitectura doctrinaria y jurisprudencial en torno al principio denunciado. Por lo demás contraría la propia conducta de los empleadores, que lo han oblado en forma pacífica y habitual, conformando las notas salientes del concepto salarial. Es claro que podría argumentarse que el carácter no remunerativo del beneficio estaría dado por las formalidades documentales con que era extendido, conforme disposiciones del propio artículo 105 bis, 4º párrafo, pero tales artificiosas modalidades constituyen, salvo en el organigrama inconstitucional y velatorio de esa norma, un verdadero y monumental fraude laboral. Constituye, por lo demás un principio reconocido y ampliamente difundido en el ámbito del derecho del trabajo, aquel que establece la prevalencia de la relación real por sobre las formalidades que las partes hayan adoptado en particular cuando éstas vulneran garantías básicas que hacen a la relación jurídica.

Pero tratándose de una norma de claro perfil inconstitucional, ésta lo es en una variada gama, pues también lesiona el artículo 17 de la Ley Suprema, en tanto menoscaba el principio de que la propiedad es inviolable. En efecto la vulneración de esta garantía se produce con el desconocimiento de la doctrina de los derechos adquiridos, doctrina de antigua data en nuestro derecho y validada por los más prestigiosos juristas, no sólo de nuestro país sino del mundo del derecho en general. La incorporación de hecho de este rubro a beneficio a la paga efectuada al trabajador, lo convierte por su propia habitualidad y repetición en el tiempo

(estamos hablando de siete años de vigencia del sistema) en un derecho incorporado o adquirido por el sujeto comprendido en su órbita. Obsérvese que los propios obligados a oblar la prestación no han puesto en duda en todo tiempo de su vigencia, la permanencia del beneficio, y no resulta sencillo encontrar casos de cese del pago de este rubro ni controversias acerca de su debida percepción. Más fuerza adquiere la razonabilidad de los fundamentos que se expresan en este apartado cuando se considera el carácter alimentario del beneficio. En efecto dicho carácter es la nota esencial que distingue al salario pagado como resultado de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo al empleador, de cualquier otra contraprestación que se obtenga por otro tipo de relación jurídica. El salario en su conjunto tiene un particular carácter alimentario, pues provee a quien lo percibe de los medios materiales, indispensables para su manutención y de su prole. Este núcleo esencial de la paga salarial es receptada con particular sensibilidad por la noción jurídica de derecho adquirido, y en tal sentido su desconocimiento, retaceo u omisión implica un real menoscabo al principio de propiedad. Cabe agregar, por otro lado, que estamos abordando el derecho de propiedad, desde un plano que revela su porción más sensible, pues nos referimos a la propiedad de uso, incluida en el concepto global que recepta nuestra Constitución, es decir, la propiedad de quien posee los insumos materiales indispensables para desarrollar su vida, un tipo de propiedad que no es susceptible de producir rentas sin trabajar, cuya afectación constituye la afectación misma del nivel y calidad de vida de quien, con su labor, la percibe.

En tren de producir desaguisados, dada la magnitud astronómica de los groseros menoscabos normativos en la reaccionaria y excluyente gobernabilidad del sistema por parte del Poder Ejecutivo, por propia boca del ministro de Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Caro Figueroa, especie que fue recogida por diversos medios comunicacionales, recientemente, a raíz de las medidas draconianas tomadas por su ex colega de gabinete doctor Cavallo, tendientes a derogar virtualmente el régimen de asignaciones familiares, también mediante decreto de pretendida necesidad y urgencia, y ante el anuncio de modificación del sistema de tickets canasta, proponiendo la derogación de la exención de los aportes patronales que lo regía, el doctor Caro Figueroa expresó, ante la fundada sospecha de muchos, que tales beneficios dejarían de ser oblatos por las empresas obligadas, que dicha circunstancia no era legalmente posible, en tanto constituía un claro incumplimiento atento el carácter de derechos adquiridos del beneficio otorgado. Por lo que, cabría agregar, conforme el conocido axioma difundido en foros judiciales, a confesión de parte relevó de prueba.

Podrá argüirse que las razones dadas en estos fundamentos en contra de la constitucionalidad del precepto en cuestión, carece de asidero pues la justicia puede no haberla declarado por intermedio de algunos de sus jueces. Pero tal circunstancia revelaría, en todo caso, que los extremos fácticos sobre los cuales deben ponderar los jueces, no han sido puestos a su consideración, pues en los siete años que el sistema lleva de vigencia no se ha verificado controversia dada la pacífica acep-

tación de los empleadores de su obligación, y por ende su paga habitual y extendida en el tiempo.

No puede quedar fuera de estos fundamentos una visión desde el ángulo de lo moral en el abordaje de la problemática en cuestión. En efecto, ¿puede considerarse conveniente, deseable, sano o ético, desde la perspectiva de quien trabaja para ganarse su sustento que los rubros que componen su paga salarial se consideren "beneficios no remunerativos" a los efectos de poder indisponerlos cuando la parte obligada a oblarlos lo decida? ¿Es auténticamente moral que un rubro eminentemente alimentario pueda quedar sujeto a los vaivenes de decisiones unilaterales, sin que quien invierte horas de trabajo para percibirlo, tenga derecho alguno para reclamar? ¿Es razonable que el empresario esté facultado por ley para retirar dicha paga habitual y reiterada en tanto quien la percibía, tenga que proseguir laborando en los ritmos y horarios en que venía desarrollando sus tareas? Evidentemente que frente a estos interrogantes la respuesta es un rotundo no. No es moral, ni es ético, ni es razonable, ni tampoco es conveniente que tales cuestionamientos queden vigentes, por ello propiciamos estas observaciones al fondo del asunto en vista.

Respecto a la segunda objeción que nos merece el asunto en tratamiento, entendemos que en contrario a lo establecido en el proyecto el pago del rubro bajo la denominación genérica de tickets debe abonarse en moneda de curso legal. El pago remuneratorio en dinero se basa en razones de conveniencia económica favorables al trabajador, en tanto propicia una mayor y saludable libertad del mismo, limitada en el sistema anterior, dada la retribución en forma de tickets. En efecto, el trabajador podrá hacia futuro, disponer de esta parte salarial como mejor considere, sin tener que sujetarse a gastos dirigidos a paliar necesidades puntuales (tickets de comida o canasta).

No es un secreto para nadie que los pagos remuneratorios en especie, tales como los efectuados en bonos, vales o tickets, acarrear graves dificultades a quienes de ese modo los perciben, y se convierten en un instrumento irregular, que por lo general termina transformándose en un nuevo modo de exacción al trabajador. En efecto es un hecho notorio, que atento la escasez del poder de compra de la masa salarial, muchos trabajadores que perciben estos pagos, deben someterse a operaciones financieras en aras de obtener, mediante el descuento de los tickets, dinero en efectivo que contribuya a ensanchar sus ingresos. Estas operaciones implican exacciones mediante descuentos sobre los montos nominales de los documentos que se cambian, situación que no tiene razón de ser, ya que tales mecanismos son inducidos por un régimen de pago salarial de pago malsano e inequitativo que objetivamente reclama su modificación.

Por último objetamos la rebaja de aportes patronales que dispone el proyecto, en tanto en su quinto artículo establece una contribución patronal del 10 % sobre el beneficio indicado. No nos parece razonable ni atinado, la reducción del régimen de contribución, tomando como referencia el porcentual de cargas que rige sobre el resto de la remuneración, en atención a la problemática que afecta la seguridad social en el país, en claro me-

noscano de los beneficios otorgados al trabajador. Son conocidas las crisis y los quebrantos económico-financieros que padece el sistema de seguridad social en Argentina, por lo que la reducción aludida en las cargas sociales de las empresas que abonan el rubro, contribuiría a deteriorar aún más ese cuadro de crisis. Por tal razón entendemos que sirve a los fines de su parcial saneamiento el restablecimiento de porcentuales idénticos a los que rigen la totalidad de la remuneración percibida por el empleado, en concepto de aportes y cargas sociales, quedando los mismos a cargo exclusivo del empleador, adoptando un mecanismo de estricta justicia a efectos de impedir cualquier deducción del rubro comprendido que afecte su intangibilidad. Con lo que adicionalmente se logra el propósito de incrementar lo que se denomina remuneración secundaria, destinada a ampliar en parte, la red de contención social de los trabajadores.

Saludo al señor presidente muy atentamente.

Florencia E. Gorini.

3

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo contenido en el Orden del Día Nº 513. Villalba. (114-D.O.-1996.)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

Me dirijo a usted en el término establecido en el artículo 95 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con el objeto de observar el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, publicado en el Orden del Día Nº 513 referido a la ley 20.744 de contrato de trabajo en lo relacionado con la eliminación de vales alimentarios o cajas de alimentos.

Las razones por las que observo al dictamen en su totalidad y solicito su rechazo, las expondré oportunamente en el recinto.

Saludo a usted atentamente.

Alfredo H. Villalba.

Sr. Presidente (López Arias). -- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. -- Señor presidente: como anuncié la semana pasada en este recinto, quiero recordar que en 1989 la sistemática y recurrente crisis vivida por los trabajadores originó una decisión que hoy nos convoca a que la redefinamos en tanto y en cuanto estemos comprometidos en legislar de acuerdo con la realidad y en comprenderla en su real dimensión. Me refiero a los vales alimentarios y canastas de alimentos conocidos como tickets-canasta. La medida fue aplicada a través de los decretos 1.477

y 1.478 de aquel año con carácter no remunerativo, involucrando hasta un veinte por ciento del salario del trabajador.

Este beneficio social se asentó como un uso y costumbre con el transcurso del tiempo y pasó a ser un aporte imprescindible para el mantenimiento económico de los grupos familiares que se sustentan en los ingresos provenientes del trabajo. Recordemos que, por ser no remunerativos, estos beneficios afectaron a las obras sociales de los gremios y a las cajas previsionales, pero como sigue vigente aquello de que la única verdad es la realidad se aceptó esta forma de pago complementaria que en cierta forma sustituyó una asistencia social débil y carente de una direccionalidad precisa.

Posteriormente, en 1993, el decreto 333 determinó que una serie de beneficios directos pasaran a formar parte del salario no remunerativo. En este sentido podemos citar, entre otros, los reintegros por gastos, la ropa de trabajo, los útiles provistos y demás elementos, a los que se eximió de cargas remunerativas, definiendo jurídicamente la calificación de cuáles iban a ser los beneficios no remunerativos de manera concreta y taxativa, sustentada en el derecho positivo.

No quiero que se pierda de vista la actitud asumida por esta Cámara en oportunidad en que tomó conocimiento del decreto 1.477 del año 1989. Manifestamos nuestra disconformidad por la forma y el contenido de la medida, aunque no se haya podido convertir en ley.

Con el transcurrir del tiempo se sucedieron políticas claramente dirigidas a buscar formas adecuadas para reducir los aportes y contribuciones, consolidándose el sistema a fin de que el salario de bolsillo no decayera en detrimento de los trabajadores.

Para equilibrar el déficit de la seguridad social, el Poder Ejecutivo dictó hace poco tiempo el decreto 773/96, por el cual se dispuso que los vales de comida tuvieran carácter remunerativo. Si bien se expresó la equitativa idea de que todos los beneficios debían ser remunerativos, la medida suponía que con el objeto de paliar dificultades financieras el trabajador podría ver disminuido su salario, ya que no era descabellado pensar que los empresarios —con el fin de no tener que absorber mayores costos— redujeran los sueldos de su personal.

Con la absoluta claridad de que se precarizaba la inalterabilidad salarial, elaboramos un proyecto de ley con el fin de derogar ese decreto riesgoso, fundamentalmente ineficiente y enfrentado a la opinión pública.

Insistimos en eso de que la realidad era un factor primordial a tenerse en cuenta, porque no es la primera vez que una crisis nos lleva a tomar determinaciones contrarias a nuestro deseo. Pero para resolver los problemas que angustian a nuestra sociedad, necesitamos abordarlos con serenidad y adultez, porque dichos problemas no datan de un período de gobierno, sino de un prolongado proceso de nuestra historia, con desaciertos, descuentros, dilaciones y malos manejos.

De más está decir que hoy vayamos a poner el bolsillo del trabajador como soporte para fianciar una crisis cuasi impositiva que está enraizada en cuestiones culturales muy profundas que no tienen por qué pagar los que menos ganan.

El Congreso es quien debe laudar en este tema, apoyándose en una realidad incontestable: los representantes del pueblo tienen que proteger lo que beneficia a la sociedad, más allá de que no siempre se consiga lo mejor, ya que vivimos tiempos en los que no se elige a discreción.

Los argumentos expuestos me llevan a solicitar el apoyo de mis pares a fin de que aprueben este proyecto de ley que define los beneficios sociales, las prestaciones no remunerativas y sus correlativas limitaciones.

Insisto en que nos vamos a oponer a que se jaque dinero al que trabaja para que les cierren las cuentas a los empresarios. Nos queda bien claro que esto no es la panacea sino una alternativa: mantener el vale alimentario en condiciones que no amenace el salario.

Conscientes de los desfases previsionales, vamos a someter a consideración de la Cámara un proyecto de ley que grave a los empresarios con una contribución equivalente a un 14 por ciento del valor de los vales alimentarios y canastas de alimentos. El destino de esos fondos será el sistema de asignaciones familiares, propiciando un pequeño soporte para que esas conquistas emblemáticas de los trabajadores puedan seguir manteniéndose, evitando un achicamiento de las remuneraciones que no corresponde que lo asuman los que menos tienen.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: nuestro bloque ha firmado en disidencia el dictamen que estamos considerando.

Debemos aclarar que aparentemente se trata de una inocente modificación a la ley de contrato de trabajo, introduciendo lo que la doctrina considera beneficios sociales como una

distinción dentro de la remuneración. En realidad, lo que estamos discutiendo es la vigencia de varios decretos de necesidad y urgencia mediante los cuales el Poder Ejecutivo —invadiendo esferas propias del Parlamento— ha venido ilegítimamente legislando desde hace varios años en nuestro país.

Además, estamos definiendo la política salarial para el sector privado. Aunque parezca paradójico en esta sociedad, donde todo queda librado al mercado, mediante estas herramientas se pretenden establecer los valores salariales en perjuicio de los trabajadores, ya que normalmente se legisla hacia la baja.

De allí que es serio lo que se discute. Si bien varios de los llamados beneficios sociales han sido puestos en tela de juicio por la jurisprudencia en torno a su validez como remuneración, no lo es menos que hay normas internacionales y convenios de la OIT que han sido ratificados por nuestro país y que ponen límites a las facultades de la Nación para legislar sobre este tema.

Por eso apoyamos la idea de que se sancione un proyecto de ley que establezca en forma definitiva qué partes del salario tienen carácter remunerativo. Las definiciones tienen que ser coherentes y encontrarse relacionadas con otras leyes que rigen el sistema de seguridad social, así como con los convenios internacionales de la OIT. Se debe evitar que mediante estos beneficios sociales se alteren los derechos de los trabajadores. No deben servir para el fraude y para evitar los aportes a la seguridad social.

No podemos tratar este tema sin hacer un poco de historia con relación a los decretos que ha dictado el Poder Ejecutivo en materia salarial. En primer lugar, encontramos el decreto 1.477 de 1989, por el que se introduce el artículo 105 bis a la ley de contrato de trabajo, argumentándose razones de necesidad y urgencia. Es decir que por un decreto se estaba modificando una ley.

Esta norma inconstitucional autorizaba a los empleadores que ocupaban personal en relación de dependencia comprendido en las convenciones colectivas de trabajo a suministrar cajas de alimentos o vales alimentarios por intermedio de empresas especializadas y por montos que alcanzaban hasta un veinte por ciento del salario. Para el personal que estaba fuera de los convenios, el monto era hasta el diez por ciento. Se prohibía expresamente otorgar este beneficio en dinero, y debía ser entregado mediante un recibo separado del correspondiente al sueldo.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 333/93, que en verdad se convierte en

el primer intento de definir los beneficios sociales, que han sido caracterizados como prestaciones voluntarias que otorgaban los empleadores. No se trataba de una contraprestación salarial, sino de una ayuda especial que se otorgaba a los trabajadores que se encontraban en determinadas circunstancias o con cargas de familia. Estaban incluidos los servicios de comedor de la empresa, los vales de almuerzo o reintegros por comidas, los vales y canastas alimentarios establecidos en el decreto 1.477, la provisión de ropa de trabajo, los servicios de guardería, los servicios médicos y odontológicos, las primas de seguro de vida, el club de la empresa, el pago de servicios fúnebres y el comodato de la casa habitación.

En este decreto no se estableció ningún límite en relación con el monto del salario. En el artículo 2º del decreto se considera remuneración, sólo a los efectos de los aportes a la seguridad social, a rubros como las asignaciones en dinero entregadas en compensación de suspensiones de la prestación laboral, los retiros de los socios gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada y los honorarios de los directores de las sociedades anónimas.

El decreto 433 de 1993, que pretende reglamentar la ley jubilaciones, por suerte deja sin efecto uno de los incisos del decreto anterior que se refiere a los honorarios de los directores de las sociedades anónimas. Es evidente que éstos no tienen una naturaleza laboral.

Con fecha 15 de julio de 1996 se dicta el decreto 773 que deroga el decreto 1.477/89, en virtud de que la medida de otorgar estos vales de alimentos y de canasta familiar se había distorsionado, lo que afectaba el concepto de remuneración fijado por la ley de jubilaciones.

Posteriormente se dicta el decreto 848/96, que dispone que los empleadores que venían otorgando vales o cajas de alimentos están obligados a mantenerlos, pudiendo sustituirlos por su equivalente en dinero. Es decir que el Poder Ejecutivo cambia la filosofía y les da carácter remuneratorio. Contradiciendo la esencia del modelo económico que aplica, por este medio —el decreto— está disponiendo un supuesto incremento salarial.

Sin embargo, esto no es tan así, porque después se dicta el decreto 849/96 que establece una nueva enumeración de los beneficios sociales. Elimina las cajas de alimentos y vales alimentarios, pero a los efectos de computarlos como valores integrantes del salario o de los eventuales derechos del trabajador. O sea, los contabiliza respecto de los aportes previsionales,

pero no a los fines del cálculo de otros beneficios laborales, como pueden ser las indemnizaciones, las vacaciones y demás.

Por otro lado, este decreto introduce una modificación importante consistente en que todos estos beneficios sociales no pueden exceder el veinte por ciento de la remuneración normal y habitual del trabajador o 300 pesos, lo que resultare menor.

Todos estos decretos son inconstitucionales. Además, violan las disposiciones del convenio 95 de la OIT. También quiero hacer notar al cuerpo que el tema de los decretos 1.477/89 y 333/93 —referidos a los vales— ha sido discutido en la última asamblea de la Organización Internacional del Trabajo ante un reclamo planteado por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos.

Me voy a permitir leer el informe de la Comisión de Expertos de la OIT. Dice: "Que en su memoria anterior, el gobierno..." —refiriéndose al argentino— "...señaló que los decretos mencionados tenían por objeto mejorar la calidad de vida del trabajador y su grupo familiar y al mismo tiempo mantener el nivel de remuneraciones. Si bien el beneficio se fijó en relación porcentual al salario pudo haberse determinado también en relación con cualquier otro parámetro. El gobierno indicó además que las remuneraciones y las prestaciones sociales eran dos entes jurídicos claramente diferenciados, de tal manera que las prestaciones no eran en función del servicio prestado por el trabajador sino que dependían de su situación familiar. Además, la prestación no revestía carácter obligatorio para los empleadores."

Este fue el argumento que utilizó el gobierno argentino para defenderse de la tacha de que estos decretos eran violatorios del convenio de la OIT.

El informe de la comisión continúa de la siguiente manera: "La comisión ha tomado nota de estas indicaciones y en particular, de que en virtud del decreto 1.477/89 se estimula a los empleadores a establecer este régimen de prestaciones a cambio de una reducción de las contribuciones sociales."

El gobierno argentino señaló ante la OIT que los patrones debían establecer beneficios sociales a cambio de la reducción de los aportes y las contribuciones.

En el informe de la comisión también se toma nota de que el artículo 1º del decreto 333/93 estipula que los beneficios sociales destinados a mejorar la alimentación del trabajador no tienen

carácter remunerativo a los fines del derecho del trabajo y de la seguridad social, ni ningún otro efecto.

Continúa la comisión: "Empero la comisión toma nota de que 1) el artículo 1º del decreto 1.477 se aplica en los casos en los que los empleadores ocupen personal en relación de dependencia; 2) la tasa del beneficio social difiere en función de si el trabajador está o no sujeto a convenio colectivo; 3) en ninguna disposición de los textos citados se hace mención de la situación familiar del trabajador (es decir: si es soltero, casado, etcétera), y 4) que la cuantía de la prestación es proporcional al salario.

"A juicio de la comisión, de lo anterior se desprende que existe un nexo entre las prestaciones destinadas a mejorar la alimentación de los trabajadores y sus familias y el trabajo realizado o los servicios prestados de conformidad con un contrato de trabajo. Estos 'beneficios', cualquiera sea la denominación que se les dé (bonos, beneficios suplementarios, etcétera) constituyen componentes de la remuneración en el sentido que a este término da el artículo 1º del convenio 95." La comisión concluye que estas prestaciones han de quedar sujetas a las medidas previstas en todos los artículos del convenio 95.

La comisión termina solicitando al gobierno nacional que le informe sobre las medidas que ha tomado o proyecta tomar para garantizar que los beneficios sociales queden comprendidos en el ámbito de protección establecido en el capítulo IV de la ley de contrato de trabajo.

Esto es muy claro, señor presidente. La OIT ya ha dictaminado que los vales y tickets canasta son remuneración.

Por otra parte, en la misma conferencia el sector de los trabajadores argentinos estuvo representado, entre otros, por Enrique Venturini, quien al hacer uso de la palabra —repito: 83ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT— dijo que en cuanto a la instauración por decreto de beneficios sociales que no revisten carácter remuneratorio comparte la opinión de la comisión en cuanto a la necesaria vinculación entre estos beneficios y la legislación protectora de las remuneraciones.

Continúa señalando que cualquier monto que excediera los límites de nuestra ley laboral debería ser considerado remuneración normal, sometida a las contribuciones sociales y computada para licencias, indemnizaciones y pago de horas extra suplementarias.

Estas manifestaciones que han sido compar- tidas por toda la representación gremial de nues-

tro país en la OIT, hoy se ven contradichas por la acción de algunos señores diputados en este recinto.

Por estas razones, porque queremos respetar los convenios firmados por el país y porque consideramos que todas las asignaciones tienen el carácter de remuneratorias, nuestro bloque votará en contra del proyecto de ley en tratamiento.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: constituye realmente un honor poder hablar de un tema que se vincula con el salario de los trabajadores en un Parlamento que tiene una mayoría que se define como del "partido de los trabajadores". Es un honor para alguien que milita en un partido político que con el Justicialismo ha tenido muchas veces en la historia peleas muy duras por nuestras maneras distintas de ver lo que es la vida en sociedad; pero que también ha tenido sueños compartidos en distintas épocas de la vida política.

Con este proyecto estamos empezando a debatir el paquete del nuevo ajuste que tendrá que enfrentar la Argentina en los próximos días. En consecuencia, después de haber escuchado el informe de un prestigioso hombre del movimiento obrero, quien ha informado por la mayoría, y el meduloso análisis que hiciera el señor diputado Pernasetti, creo que es conveniente poner las cosas en su lugar.

No estamos discutiendo aquí, de ninguna manera, el perfeccionamiento de la legislación protectora de los trabajadores argentinos. Tampoco estamos discutiendo una mejor protección para el instituto del salario, de los convenios colectivos u otro beneficio para los hombres que trabajan. Esta discusión se inserta en un debate mayor que tiene que dar el país y que lo empezamos a hacer hoy; esto es, cómo tiene que funcionar la economía y si deben ratificarse o rectificarse los rumbos adoptados.

Los hombres del gobierno tienen la obligación de dirigir los destinos del país, y está bien que lo hagan. No vamos a ser nosotros quienes obstarálicemos ese derecho, que también es una obligación. Pero nosotros tenemos el derecho y la obligación de marcar nuestras discrepancias y nuestras alternativas para que la sociedad tenga en claro cuáles son las diferentes opciones que se presentan ante su vista a la hora de decidir.

Nosotros queremos alertar a los hombres del gobierno diciendo que el rumbo que se ha tomado, y con el que se insiste, nos está llevando

inexorablemente al centro de un conflicto social, a una situación de dureza extrema; nos está dibujando una convivencia que ni unos ni otros queremos, si es que respondemos a los mandatos fundacionales de nuestras respectivas fuerzas políticas.

Con toda honestidad quiero decir a los hombres del Justicialismo que este ajuste es el resultado de haber generado un poder económico sin control, como nunca había ocurrido en la historia de este país hasta 1989; que este ajuste es el resultado de no haber puesto contrapesos eficaces en esta política de privatizaciones que generó grupos económicos concentrados sin vocación nacional alguna, que han aislado su destino del beneficio del país y de la convivencia social, y que sólo persiguen el lucro.

La situación a la que hoy nos enfrentamos es fruto de la angustia de todo este poder económico al cual seguramente este ajuste no le resultará suficiente, y dentro de tres meses estarán pidiendo otro, y luego de tres meses otro más, y así sucesivamente, como lo vienen haciendo desde tiempo atrás.

Frente a todo esto debemos analizar en profundidad lo que hay que definir desde la política. Sólo por un instante desco ubicarme en lo que piensa, siente y vivencia un hombre de la Puna o de nuestra querida Patagonia, un productor del Litoral, un comerciante del Once o un pequeño empresario que apuntó al Mercosur y hoy no puede subsistir. Quiero imaginar qué piensa él de nosotros y entender por qué le llega con tanto facilidad esta prédica repugnante del poder económico que ha hecho una simbiosis con el poder comunicacional, para el cual, como lo expresó un diputado justicialista, los políticos son todos ladrones, corruptos, sinvergüenzas, inmorales e inútiles.

Sabemos que esto no es así porque sufrimos la vida política desde hace años y unos y otros hemos padecido cárceles y persecuciones, como asimismo todo lo que implica enfrentarse con la fuerza del poder. Unos y otros también sabemos —aunque a veces no lo asumimos— que frente a ese gigantesco poder económico la única salida que tiene la Nación Argentina no es que nos atormentemos mutuamente sino la unión para reconstruir el espacio político.

El único modo de canalizar el capital en beneficio de las mayorías es cambiar este rumbo que sólo nos lleva a una concentración económica cada vez mayor y diseñar de nuevo el país de nuestros sueños. En ese sentido, quiero recordar que la Argentina no fue siempre así.

No alcancé a ver el primero y segundo gobierno peronistas en las décadas del 40 y del 50, pero guardo en mi memoria algunas conversaciones familiares de discrepancia. Mi familia no era peronista pero tengo grabadas en mi memoria imágenes de los cinco o seis años entre las cuales rescato la de la publicidad del Segundo Plan Quinquenal. Tal publicidad pretendía difundir la idea de una Argentina surcada de autopistas, con torres de alta tensión, fábricas, prosperidad, crecimiento, todas las regiones en desarrollo y el país entero creciendo de modo parejo. A pesar de las discrepancias de entonces, ése era un sueño compartido.

En aquella época la Argentina inició su programa nuclear por la obra visionaria del presidente Perón. Esa Argentina grande llegó a tener 40 mil kilómetros de vías ferroviarias; tenía las mejores universidades del continente y llegó a ser ejemplar en materia de educación. Esa Argentina podía mostrar el mejor modelo de desarrollo social de toda América latina.

Hoy observamos lo que tenemos y, no sé si por culpa de unos, de otros o de todos, lo cierto es que ya no tenemos trenes, ya no somos dueños de nuestro petróleo, carecemos de industrias siderúrgicas y petroquímica, no tenemos rutas, sistemas de comunicación, líneas aéreas, etcétera.

Y podríamos continuar con los “no tenemos” porque no tenemos nada de lo que fue ese sueño compartido.

Por lo expuesto exhorto con angustia a los hombres de la mayoría para que reaccionen pues estamos a tiempo y es posible continuar con la construcción de un gran país que respete a sus trabajadores, sus empresarios y su clase media, y que haga florecer las regiones, donde todos podamos cambiar este modelo de acumulación económica, pero también política, que hace fragmentar el país y que lo hace vaciar.

Para poder cambiar el rumbo, el modelo no es acumular con los grandes empresarios y pelear con los que no están de acuerdo. El modelo es diseñar esa política importante que sirva de contrapeso al poder concentrado; volver a sentir palpar la patria en las entrañas, volver a emocionarnos como cuando empezamos a trabajar en política, frente al hombre que está lastimado porque su hija debe prostituirse para llevar un mendrugo de pan a su casa. Tratar de buscar la fórmula para mejorar la vida de nuestros compatriotas de menores recursos, que hoy reciben el accionar de esos comunicadores que transmiten en cadena y que cualquiera sea su supuesta ubicación ideológica desprestigian a los

políticos, como si fuéramos los causantes de los males que afectan al país.

Esos comunicadores, financiados por el *establishment*, tratan de debilitarnos cada vez más y de impedir que actuemos desde el único lugar del cual puede salir la reacción o la capacidad política para producirla.

Nosotros debemos volver a ponernos al frente de nuestro pueblo construyendo el país. Tenemos que volver a dibujar esas utopías, no tratando de hacer esas ingenierías que comprometen a nuestros hermanos, sino levantando la vista y mirando hacia dónde vamos. Tratando de cambiar este rumbo de conflicto inexorable, y tratando de dibujar ese rumbo de confluencia que vuelva a hacer de nuestra Argentina el país que todos hemos soñado desde siempre.

Las cargas sociales no son importantes en el país. Hay países que tienen cargas sociales...

Sr. Britos. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Lafferrière. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: podemos compartir muchas cosas de las expresadas por mi amigo, pero mi "compacorreligionario" no ha hablado del proyecto que estamos tratando, donde advierto la dualidad de criterios y observo en la bancada radical la presencia de abogados de prestigio que, evidentemente, están cometiendo un error.

Muchos de ellos son firmantes de un proyecto derogando este decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno. Derogan el decreto y dejan en vigencia el anterior, de los tickets canasta, que estaba en contra de la resolución número 81 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir que con esta dualidad de criterios, tengo la impresión de que se pretende explotar este momento, porque si no se estaba de acuerdo acerca de la distribución que establecía el decreto del año 1993, se tendría que haber dicho en todos estos años, y no se dijo.

En el Parlamento no existe un solo proyecto de la bancada radical al respecto, y entonces me pregunto: ¿qué es lo que nos avergüenza? Porque esto de los tickets canasta tampoco nos agrada a los peronistas. Pero la realidad es que la gente ya los tomó como costumbre. Para nosotros sería mucho mejor rechazarlos, porque el régimen es perjudicial, afectando incluso al sistema previsional.

Por eso la discusión que quiere plantear el compañero, correligionario y amigo debería hacerse en otro momento, no en éste. Creo que en este momento el radicalismo se equivoca totalmente.

Sr. Pernasetti. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Lafferrière. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: es a efectos de aclarar las manifestaciones del señor diputado Britos. El radicalismo no habló en ningún momento de la derogación de los decretos 849 y 773. No tenemos proyectos de ley en ese sentido; hemos planteado lo relativo a las asignaciones familiares, pero no en este tema, porque nosotros, al decreto 1.477, que es derogado por el 873, nunca lo consideramos válido.

Por otra parte, es cierto lo manifestado en cuanto a que el litigio que se origina a causa de estos beneficios sociales nunca fue planteado por los trabajadores sino por el propio Estado a través del Ministerio de Economía y por un mero afán recaudatorio.

Reitero que fue el Estado quien planteó la discusión judicial sobre el carácter remuneratorio o no de estos beneficios y que la Unión Cívica Radical nunca solicitó la derogación del decreto mencionado; por ello, no hay contradicción en nuestra conducta.

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: agradezco el enriquecimiento al debate que han realizado los señores diputados, pero he de insistir en mi línea argumental en el sentido de que existen muchos vericuetos, modificaciones, avances y retrocesos, pero hay una sola cosa cierta: el bolsillo se achica, adelgaza el salario, disminuye la demanda global y el rumbo del país no mejora.

Recordemos que en otras épocas, cuando ocurrían cosas como éstas, el gobierno procedía a devaluar y la capacidad de compra se achicaba en forma pareja para todos. Ahora ello no es posible y, por lo tanto, hay que elegir a quién se le quita capacidad de compra.

En esta oportunidad el Parlamento está eligiendo, porque esta medida se suma al incremento de los aportes previsionales de aquellos que tributan menos en lugar de perjudicar a

quienes lo hacían en mayor porcentaje, y a la anulación del impuesto a los bienes suntuarios, iniciativa que, más allá de su implicancia económica, representa una cachetada al sentido común.

Asimismo, esta iniciativa representa avanzar en un paquete de medidas que modificarán los recursos que reciben las provincias, ahogando de ese modo a la producción y el consumo.

No hay una sola propuesta que castigue a los sectores de altos ingresos o parasitarios del país; todo tiende a perjudicar al salario y la producción. Incluso, se adelantó que será vetado un proyecto de avanzada surgido del propio bloque oficialista en el sentido de duplicar la tasa a los capitales de las personas o de las empresas, con lo cual ni siquiera se va a mejorar el peso impositivo que recae sobre los sectores inferiores de la sociedad.

Nuestro modelo es otro y no es contestatario. Así lo demostramos al inicio de la sesión a través de una votación unánime, porque cuando se presentan medidas sensatas que avanzan en el rumbo correcto no sólo nosotros sino todo el arco político acompaña a la mayoría que tiene la responsabilidad de conducir este proceso. Pero con la misma firmeza decimos que estamos en contra de este paquete de medidas porque no condice con un plan de transformación ni con un programa de crecimiento que llegue a todas las regiones y nos ayude a poner nuevamente nuestros sueños en carrera.

Esta es la razón por la cual votaremos negativamente este proyecto pero, al mismo tiempo, adelantamos que si los hombres de la mayoría rectifican el rumbo y deciden achicar la fuerte alianza que tienen con el poder económico los ayudaremos a ejercer el contrapeso necesario para que nuestra gente tenga quien la defienda. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? ¿Quién puede poner un paraguas si no somos los políticos mediante normas adecuadas y uniendo nuestras fuerzas ante esta concentración económica? Si deciden avanzar en este rumbo, lo que no significa tomar medidas alocadas sino la decisión de retomar el camino de la Argentina que alguna vez fue, estaríamos dispuestos a poner la mano y el hombro tal como lo hicimos en estos últimos años.

Si los hombres de la mayoría deciden pelear por una patria justa, libre y soberana o —como nos gusta decir a nosotros— por una Argentina más justa, más libre y más igualitaria podremos transitar el camino que transformará a la Argentina en una nación de la que todos estaremos orgullosos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: el tema que estamos tratando nos lleva a formular una propuesta que, indudablemente, va a crear algunas dudas en la Cámara. Vamos a proponer como moción de orden —en virtud del inciso 8º del artículo 108 del reglamento— que este asunto vuelva a comisión.

Las razones de este pedido, que pareciera interferir en el programa que estamos desarrollando, son muy importantes. De todas formas no me voy a explayar demasiado sobre ellas porque lo haré en el próximo debate de la semana que viene, cuando tratemos el conjunto de medidas del sistema tributario. El hecho de discutir acerca de los tickets y las asignaciones familiares sin considerar la totalidad de la situación de crisis que estamos viviendo, indica que el Parlamento está desubicado respecto de esos temas.

Esta crisis, que existe y es severa, no es de ahora sino que se gestó durante el período anterior. Esto justifica que debamos dar al actual equipo económico un poco más de tiempo.

El pedido de que este asunto vuelva a comisión debe estar acompañado de la recomendación de que este tema sea considerado en este recinto dentro de unos cuantos días, dentro del marco del conjunto de medidas que se ha de adoptar y del proyecto de ley de presupuesto de 1997, cuyo envío se producirá en pocos días. De manera que mi pedido no implica una postergación significativa del asunto.

Fijense que mientras hablamos de estos temas, el país enfrenta un déficit. Este no es de 2.500 millones de dólares, como se ha dicho anteriormente y que incluso fue una cifra aceptada generosamente por el Fondo Monetario Internacional; tampoco es de 3.500 millones de dólares —como rectificara el ex ministro Cavallo— ni representa una cifra vacía o indefinida, como de la que se habla ahora. El déficit real es de 12 mil a 13 mil millones de dólares. Frente a este déficit, resulta un poco desproporcionado que discutamos acerca de los tickets y las asignaciones familiares. No digo que por razones de ordenamiento no haya que hacerlo, pero esa no es la manera de encarar el tema.

Ante la crisis actual no caben más los paliativos ni las soluciones a medias. Estoy de acuerdo con el señor diputado preopinante en el sentido de que debemos llevar a cabo ese gran debate que hace tanto tiempo que se viene postergando. Hay que discutir en torno de la

política económica, y por supuesto, observar las propuestas de cambio de rumbo que van a traer el bloque radical y otros sectores, y de ese análisis del conjunto debe surgir una decisión que contemple las necesidades de todo el pueblo argentino.

En definitiva, formulo moción de orden de que el asunto en tratamiento vuelva a comisión, con la recomendación de que sea replanteado juntamente con el proyecto de ley de presupuesto para el año 1997.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia desea saber si el señor diputado por la Capital está de acuerdo en que la moción que ha formulado sea considerada luego que finalice el tratamiento en general del proyecto de ley.

Sr. Alsogaray. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, queda diferida la consideración de la moción formulada por el señor diputado por la Capital.

Si bien la señora diputada Sánchez no ha solicitado el uso de la palabra, de todas formas se la concederé en homenaje al número de su bloque, aclarando que el señor diputado Gatti me sugirió compartir con la señora diputada el tiempo del que dispone su bloque.

Sra. Sánchez. — ¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente?

Sr. Presidente (López Arias). — Reglamentariamente, de una hora.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Sánchez. — Señor presidente realmente parece asombroso el fundamento del bloque oficialista cuando plantea que por medio de este proyecto de ley vamos a beneficiar a los trabajadores, defendiendo su salario de bolsillo.

Lo que en este recinto estamos tratando no es otra cosa que el proyecto de ley que iniciara el Senado de la Nación. Aquí debemos tomar conciencia de que estamos avanzando sobre la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. Este es el fondo del problema. Entonces, cuando se hace un *racconto* para ver cómo hemos llegado al último decreto y por qué ahora nos encontramos considerando esta norma en el recinto es falso decir que lo hacemos en nombre de los trabajadores.

Aquí se han mencionado los decretos 1.477 y 1.478, de 1989. Estos decretos, dictados en el segundo semestre de 1989, se plantean como una necesidad frente a la hiperinflación, a la imposibilidad de otorgar aumentos de sueldo por con-

venios, etcétera, y rápidamente —con algunas personas que conocemos todos, que pasaron por SOMISA— se inventan las empresas de los ticket-canasta. Así se avanza sobre la ley de contrato de trabajo, haciendo no remunerativos estos ticket-canasta. Pero la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Senado de la Nación, presidida por el entonces senador Oraldo Britos, sabiamente plantea el 10 de septiembre de 1990 el rechazo de estos decretos, lo cual es llevado a cabo. Así, finalmente, la Cámara de Diputados sanciona una ley rechazando y derogando el decreto 1.477. Ahora bien, el 6 de junio de 1991 la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo nacional que no aplique este decreto. Como podemos leer en el Boletín Oficial del 18 de diciembre de 1991, en una forma asombrosa el entonces ministro de Trabajo —conocido como el “Chango” Díaz— considera todos estos antecedentes, el del Senado de la Nación, el de la Cámara de Diputados de la Nación y el de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y declara que existe una inestabilidad legal en esta materia porque se está avanzando con un decreto sobre la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de entonces tiene que hacer resolutivas esas declaraciones lo único que hace, graciosamente, es plantear que cerrará el registro de las empresas de los ticket-canasta dando el fundamento anteriormente señalado.

Como si esto fuera poco, en 1993 se dicta el decreto 333 cuando se comienza a hablar de la necesidad de reducir el costo laboral en la Argentina. Efectivamente aquí se modifica el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y los artículos 10 y 12 de la Ley de Asignaciones Familiares y lo que hoy se pretende hacer en el Parlamento es ratificar ese decreto, porque tiene esta ley el mismo contenido. Es decir, se pasa a considerar como beneficios sociales derechos de los trabajadores, complementos y asignaciones que constituyen el salario, tal como claramente lo determina tanto la Ley de Contrato de Trabajo como el Convenio 95 —que fue ratificado— de la Organización Internacional del Trabajo.

Es imposible que hoy se cambie esta concepción y se tomen como pretexto los ticket-canasta, el último decreto y supuestamente la defensa del salario de bolsillo del trabajador para avanzar en otros elementos que contemplaba el decreto 333, habiendo fallos contrarios en las distintas cámaras del trabajo. Esto ha hecho que los trabajadores estén permanentemente envueltos en una inseguridad jurídica. Sin embargo,

esto no parece interesar mucho en la Argentina de hoy. Nos preocupamos por la seguridad jurídica de las multinacionales y de quienes se están quedando con el país y no pensamos en la seguridad jurídica de los trabajadores.

Posteriormente se dicta el decreto 433, por el cual el Poder Ejecutivo reglamenta los artículos 6º y 7º de la Ley de Jubilaciones. Todos estos decretos fueron vaciando las cajas de previsión y las obras sociales y afectando a las asignaciones familiares. Luego se empieza a considerar en la Argentina que en materia de beneficio social el concepto de seguridad equivale al de impuesto, porque así era como funcionaba la caja única que manejó Cavallo. Para esta concepción es lo mismo el aporte del empresario y del trabajador para un destino determinado, que los impuestos.

Nos preocupa que cuando se habla del decreto 773/96 —que supuestamente vamos a derogar en beneficio de los trabajadores, decreto que a su vez deroga el 1.477—, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, junto con el gobierno nacional, plantee que esto se hace para que no exista una contradicción con el artículo 6º de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ratifico lo que ha dicho el señor diputado Pernasetti en el sentido de que la Organización Internacional del Trabajo exigió al gobierno nacional que explique cómo iba a hacer para evitar que la aplicación de los decretos 1.477 y 1.478 no afectara el salario, sea en dinero o en especies. En ese sentido, llamo la atención de la bancada mayoritaria para que no volvamos atrás.

Esto es absolutamente grave porque no sólo eliminamos el carácter remunerativo de lo que son los tickets canasta, sino que avanzamos en el mismo sentido cercenando otros beneficios que tienen los trabajadores y que perderán en el momento en que se sancione este proyecto. Todo esto tiene que ver con la dirección de la política económica, por lo que deseamos saber si otra vez vamos a castigar a los trabajadores.

¿Por qué no se llamó a una reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social a la que asistieran los trabajadores, los empresarios y los representantes de las empresas que proveen los tickets canasta? ¿O acaso nos olvidamos de que en forma permanente todos y cada uno de los decretos dictados para reducir el costo laboral significaron una disminución de los aportes patronales? Esto lo ha reconocido la UTA cuando dio a conocer que en los últimos cinco años se redujo el costo laboral en un 12 por ciento.

En consecuencia, deberíamos plantearnos dos cosas fundamentales: reconocer el carácter remunerativo de los tickets canasta y tratar el problema de esos vales en un contexto de emergencia alimentaria, sin avanzar sobre la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, hubiera sido absolutamente posible plantear el tema de los aportes patronales como corresponde y, ante la emergencia alimentaria de los trabajadores, no reducir el salario. Sin duda esto hubiera significado un beneficio para los trabajadores. Pero maniqueamente se plantea que los vamos a favorecer, como si los trabajadores no supieran de antemano que el carácter no remunerativo de los tickets canasta tiene que ver con la reducción del aguinaldo, con las indemnizaciones, con las vacaciones y con que puedan acceder a un sistema de salud acorde a sus necesidades. También se va a impedir el acceso a las jubilaciones, a pesar de que todos los miércoles los jubilados manifiestan ante el Congreso por el vaciamiento de las cajas previsionales.

Entonces no podemos aceptar desde ningún punto de vista que se diga que los trabajadores van a recuperar en su salario de bolsillo el bono alimentario, que ha constituido una vergüenza. Han sido muchas las organizaciones gremiales —como la CTA— que han planteado ante la Organización Internacional del Trabajo lo que pretende hacer el gobierno nacional.

En consecuencia, para empezar a decir “no” al paquete económico y a la flexibilización laboral demos una muestra clara de que no estamos de acuerdo en que se consideren no remunerativos a estos beneficios alimentarios.

Me parece asombroso que el ex ministro de Economía haya concurrido a este recinto para solicitar que se disminuyeran los impuestos internos. Así el país perdió trescientos millones de dólares. Un mes después se mete la mano en el bolsillo de los trabajadores en lo que atañe a las asignaciones familiares y se dicta un decreto que se sabía los empleadores iban a rechazar.

El movimiento sindical y la bancada mayoritaria no pueden decir que esto beneficia a los trabajadores. En todo caso, sería importante que reconocieran que éste es un “apriete” más del gobierno nacional.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti.— Señor presidente: nos encontramos a noventa y un años de la sanción de la ley que estableció el descanso hebdonadario para

la Capital Federal y los territorios nacionales; se dicta en 1905 a instancias del senador Alfredo Palacios.

También estamos a cincuenta y un años de la sanción de un decreto trascendente, el 33.302, que en 1945 crea el instituto de las remuneraciones. Hoy nos encontramos en este debate lamentable, porque pareciera que la resignación frente a la imposición de los sectores que detentan el poder es el argumento que se utiliza para justificar una decisión que va a contrapelo de las normas que la doctrina y la jurisprudencia universal han elaborado sobre el derecho del trabajo y, especialmente, sobre el salario.

En las primeras leyes que se dictaron a principios de siglo se encontraba la correspondiente a la integralidad y defensa del salario. Se trató de una de las primeras normas que impulsaron la doctrina y la acción política de los distintos gobiernos.

Hoy resulta moderno lo que expresaba el artículo 2º del decreto 33.302, que definía al salario como toda remuneración por la prestación de un servicio, incluyendo dinero, pago en especies, alimentos, uso de la casa habitación, comisiones, propinas y viáticos, excepto en la parte efectivamente gastada con comprobantes.

Como bien dijeron algunos señores diputados preopinantes y como bien lo expresara la señora diputada Mary Sánchez, no tendríamos que retrotraer los elementos esenciales que integran jurídicamente el salario, sino contemplar la posibilidad de que el trabajador no haga aportes sobre el ticket-canasta. Esta figura que se ha inventado, llamada beneficios sociales, le quita el carácter salarial a numerosas prestaciones en especie que desde hace años los empleadores otorgan a sus trabajadores, que la jurisprudencia pacíficamente ha considerado remuneración y que incluso así figura en la Ley de Contrato de Trabajo.

Hoy se quieren eliminar todas estas prestaciones que integran el salario con consecuencias muy graves para el trabajador, porque en esta iniciativa sólo se mantiene la obligatoriedad por parte de los empleadores de seguir asignando el ticket-canasta, pero no todos aquellos otros rubros en especie que desde hace años contempla la Ley de Contrato de Trabajo, vinculados con la comida, la vivienda, la ropa de trabajo, etcétera, que incluso se toman en cuenta a los efectos de los distintos institutos del trabajo, como las vacaciones, la indemnización por despido del artículo 245, la indemnización substitutiva del preaviso y la retribución por enfermedad o accidente inculpa. Ahora, de gol-

pe y porrazo, para defender el ticket-canasta, se eliminan esos rubros del salario.

Me pregunto qué ocurrirá cuando el empleador decida no asignarle más comida o la ropa necesaria al trabajador, siendo que incluso eso está previsto en las convenciones colectivas de trabajo. Si no es a través de la figura del salario, ¿mediante qué instituto jurídico el trabajador podrá reclamar por la modificación sustancial vinculada con esa modalidad salarial?

Como bien lo dijo la señora diputada Mary Sánchez, nos oponemos a este espíritu de resignación y claudicación frente a normas laborales que están consagradas incluso en el orden internacional y que consagran derechos humanos intangibles. Hasta los modernos principios que se están acuñando en el derecho laboral sobre progresividad e irrenunciabilidad, hoy son tirados por la borda por esta iniciativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia hace saber a los señores diputados que, teniendo en cuenta la cantidad de anotados para hacer uso de la palabra, se corre el riesgo de quedarnos sin quórum, por lo que les ruega sean breves en los discursos.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: recogiendo la recomendación que acaba de formular, seré muy breve y en ese sentido adelanto el voto negativo del bloque PAIS.

Han sido tan abundantes las argumentaciones que se han brindado desde las diferentes bancadas, que se tornan innecesarias otras explicaciones. Sólo cabe agregar que con gran preocupación advertimos la distorsión que hace de la realidad la afirmación de que se favorece a los obreros sustrayendo beneficios. Esto distorsiona principios que todos sabemos lo que ha costado alcanzar en nuestro país.

Se violenta la realidad cuando se manejan argumentos como se lo está haciendo, pero espero que la bancada Justicialista tenga la fuerza de ánimo y la presencia necesarias para romper este compromiso que nos obliga a seguir un camino que incluso aquellos que hasta hace poco tiempo defendían fervorosamente el plan económico hoy reconocen que tal vez sea necesario discutir en profundidad.

A menos que reaccionemos, y rápidamente, nos vamos a encontrar cada día en una situación de mayor gravedad. Recuerdo aquellas frases que decían que íbamos a pulverizar el desempleo, pero el desempleo aumentó; que

íbamos a eliminar el déficit fiscal, pero ese déficit creció; que íbamos a disminuir la deuda externa, pero la deuda externa se incrementó; que íbamos a reducir la mortalidad infantil, pero fue todo lo contrario; que íbamos a ingresar en el Primer Mundo, pero ese Primer Mundo está cada vez más lejos de nuestras posibilidades.

Por todas estas razones y para abreviar mi discurso, ratifico nuestra voluntad de votar en sentido negativo esta iniciativa, pidiéndole a la bancada Justicialista que aproveche la moción de orden formulada por el señor diputado Alsogaray para que este proyecto vuelva a comisión. No sometamos una vez más al pueblo argentino a un nuevo modo de disminuir sus ya exigüos recursos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gorini. — Señor presidente: para nosotros el tema del pago con tickets se relaciona con una cuestión de principios.

El salario del trabajador debe ser abonado en moneda corriente de curso legal. No hacerlo así es volver a los vales de la década del 30, es decir, la realidad con la que se encontró el peronismo en los años cuarenta y que modificó con espíritu transformador.

Hoy volvemos a defraudar a los trabajadores. Esto es algo que fue instrumentado desde la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y significó el incumplimiento de acuerdos internacionales vinculados con el sistema de seguridad.

Se restaron recursos a un sistema que —como todos sabemos— está en profunda crisis, ya que sus ingresos se han visto disminuidos por la evasión, por el mal control de los aportes, por haber creado el sistema de administradores de jubilaciones y pensiones privadas que se llevaron el aporte de los trabajadores; etcétera. etcétera.

Se montó el negocio de empresas privadas que intermedian en el sistema de vales y que generan un circuito financiero secundario en el que cobran los vales anticipadamente y los pagan luego de que los trabajadores los realizan en los comercios. De esa forma se crea una masa de dinero con la que estos sectores especulan. Se trata de empresas que son autorizadas específicamente en cada caso por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Si realmente queremos ayudar a recomponer los recursos del sistema previsional y mejorar

el sistema de asistencia de salud de los trabajadores, debemos empezar por respetar el salario.

Teniendo en cuenta la brevedad que ha solicitado para las exposiciones el señor presidente, reitero lo propuesto en el proyecto de ley que he presentado y que no fue considerado en la comisión respectiva, aunque fue tomado en cuenta de acuerdo con lo explicado en la fundamentación de esta iniciativa. El pago debe hacerse en dinero; hay que desterrar el ticket.

Los aportes deben ser totales; no debemos inducir a la mala educación de la falta de solidaridad para con los trabajadores chantajeándoles con el argumento de que pueden contar con algunos ingresos adicionales a los magros recursos que perciben si se avienen a recibirlos en tickets.

Debemos educar a los trabajadores en el concepto de seguridad social, única forma de vivir en comunidad y restablecer el respeto por los derechos humanos, que deviene de la seguridad y la salud.

Por ello es que me opongo al dictamen de la mayoría y solicito el tratamiento de la iniciativa que oportunamente he presentado.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

Sra. Pasqualini de Acosta. — Señor presidente: debo manifestar que, sin ser justicialista, me violenta esta contradicción que noto entre este paquete de medidas económicas presentado por el gobierno y la doctrina de acción social del peronismo.

Con estas medidas se castiga a los que crean el trabajo, que cumplen con lo que es una de las preocupaciones del Poder Ejecutivo nacional, y también, en forma directa o indirecta, a los que trabajan.

Estos vales, tickets o ticket-canasta —como se los quiera llamar— se han convertido en un eficaz recurso para empleados y empleadores que de esta manera pudieron encontrar una salida al costo que significa tener hoy a una persona bajo sueldo.

El sistema se extendió y se popularizó a tal punto que actualmente unas diez mil personas trabajan en compañías especializadas en brindar este sistema. Tal grado de aceptación provocó que empresas multinacionales desembarcaran en la República Argentina montando sus propias cadenas.

Me pregunto, ¿qué va a pasar en el caso de que los empleadores decidan suprimir los tic-

kets y convertirlos en dinero en efectivo? Toda la cadena de compra va a interrumpirse, sin duda alguna. Me refiero a esa cadena que ha estado formada por los cien pesos —por poner una cifra— que el empleado recibía y gastaba en el supermercado.

En la actualidad, quienes están bajo este sistema son más de 1.200.000 empleados. Este juego de la oferta y la demanda quedaría interrumpido, porque el empleado, al verse liberado de los tickets, irá a comprar posiblemente en los mercados más próximos a su domicilio; y quién dice que a lo mejor no decida utilizar una parte de ese efectivo para realizar algunos ahorros u otros gastos que no sean de la canasta familiar. En consecuencia, menos gastos y menos ventas terminarán contribuyendo al cierre de los supermercados y a la quiebra del sistema, cuyos trabajadores quedarían sin empleo.

A mi entender, todas estas medidas, lejos de dar solución, abrirán las puertas a una avalancha de juicios laborales contra los empleadores y el Estado porque, en caso de que el empleador decida suspender los tickets, ¿quién le asegura al empleado que seguirá cobrando el equivalente en efectivo?

Pienso que el Estado, en el afán de que las cuentas cierren, está por dar un paso desafortunado. Los diputados seremos responsables si aceptamos estas medidas. Por no saber combatir la evasión millonaria que hay en el país, así como la corrupción que existe en manos de verdaderas bandas, se aplasta a quienes pagan sus impuestos puntualmente y subsisten con salarios deprimidos. Una vez más el hilo se corta por lo más delgado.

Corregir el déficit es como tratar de tapar una gotera con un solo dedo. Todos estamos esperanzados en que se tomen las medidas necesarias contra los grandes evasores y en que se castigue la corrupción. Pero también es necesario que el Estado demuestre cierto grado de austeridad en todos sus actos: en los simples y en los complejos.

Estas medidas no son un ajuste, es el primer parche de una serie de parches que vendrán. Siempre actuamos bajo presión. Siempre se nos dice que, si no aprobamos esto, peor es la alternativa. Una verdadera extorsión.

Es imprescindible un replanteo impositivo total. Pero, antes de terminar, adelanto que junto con el señor diputado Bulacio, que pertenece al bloque Republicano Democrático, adhiero a la moción del señor diputado Alvaro Alsogaray.

Sr. Presidente (López Arias). — Desde el punto de vista reglamentario corresponde que la Presi-

dencia permita la expresión del mayor número posible de sectores, motivo por el cual en primer término otorgará el uso de la palabra al señor diputado Rico, y luego a los señores diputados Barrionuevo y Atanasof.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rico. — Señor presidente: con el objeto de ser breve y no abundar en lo que ya se ha expresado, adelanto nuestro voto negativo respecto del dictamen en consideración.

Asimismo deseo aclarar que las iniciativas presentadas por el MODIN propiciaban la derogación lisa y llana de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo. Consideramos que los problemas de nuestra amada patria no se solucionan reduciendo los salarios de los trabajadores sino achicando las ganancias de las grandes corporaciones y las remesas de los recursos argentinos al extranjero.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Rafael Manuel Pascual.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Barrionuevo. — Señor presidente: voy a ser nostálgico en mi exposición por dos motivos: porque algunos lo han sido, y también porque me gusta serlo.

Para comenzar con la nostalgia quiero recordar una palabras de Perón que figuran en el primer libro que escribió en el exilio y que sostenían que el movimiento peronista y él pagaban el precio de los precursores, y que a la larga o a la corta las futuras generaciones comprenderían las posturas que él había adoptado para construir un país grande.

Un integrante de la bancada radical se refirió hoy al “sueño compartido”, y yo considero que debería haber dicho “sueño arrepentido”. Creo que los señores diputados se dan cuenta de por qué hablo del “sueño arrepentido”.

Asimismo otro diputado se refirió a la severa crisis existente. Se trata de un legislador que ha constituido muchos partidos, y en realidad debería conformar su partido definitivo, al que yo denominaría “partido de los dateros”. Desde 1955 este hombre viene diciendo cómo se reconstruye la República Argentina, y luego que deja los cargos de secretario de Comercio, ministro de Economía, asesor, etcétera, dice por qué un caballo ganó o no.

Cuando hablo de “dateros” me refiero al ingeniero Alvaro Alsogaray, quien está acostumbrado

a explicar los viernes cómo se gana una carrera el domingo y los lunes por qué no ganó el caballo que él había mencionado. Gracias a Dios mis padres aún viven para seguir refrescándose la memoria al recordar aquellos famosos títulos Nueve de Julio, con los que el país se iba a salvar, aunque hoy nos encontramos con una crisis peor. He leído varios de sus libros, en especial el último, y puedo responder a todas sus mentiras.

Continuando con la nostalgia, quiero recordar que un representante del socialismo mencionó a Alfredo Palacios y a la primera ley que se hizo para los trabajadores. Ese mismo hombre también fue el del golpe de Estado de 1955, cuyas consecuencias aún seguimos pagando. Y no sólo Alfredo Palacios fue cómplice de aquel golpe de Estado, sino embajador de ese gobierno y compañero de ruta de los hombres que integraban la Junta Consultiva representando al radicalismo, cuyos descendientes están hoy aquí.

Quería plantear esto de la nostalgia porque va a servir —lo anticipo a mi bancada— para definir la actitud que voy a tomar. Adopto esta posición en recuerdo de mi “tata”, que vive, y de muchos “tatas” que ya no viven. Y es verdad lo que dijo alguien por ahí: todavía conservo la moneda de un vale del ingenio Marapa de aquel entonces —localidad hoy conocida como Villa Alberdi— con la que le pagaban a mi “tata”, quien tenía que ir a la proveeduría con ese vale a tratar de conseguir alimentos para darnos de comer.

Por eso me cuesta entender lo que estamos haciendo. Sé que los hombres de la bancada Justicialista tratan, con muy buenas intenciones, de afrontar una etapa coyuntural, pero personalmente creo que la realidad no se tapa con coyunturas, sino con definiciones. Y una definición es no apoyar este régimen legal.

Quiero dejarlo perfectamente aclarado en recuerdo de todo lo que he planteado, de todo lo que se ha luchado y, en especial, de aquel extraordinario chango-dirigente que, cuando ese señor al que aludí era ministro de Economía y de Trabajo, fue secuestrado un 23 de agosto de 1960. Me refiero a Felipe Vallese, en cuyo homenaje no voy a apoyar hoy esta iniciativa. Recién lo haré cuando la Confederación General del Trabajo, mañana, con sus nuevas autoridades constituidas, me diga si lo tengo que hacer. (*Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 19 de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Polo. — Señor presidente: en virtud de la hora y de lo expresado por las distintas bancadas opositoras, voy a ser muy breve, adelantando mi voto negativo a esta iniciativa. Creo que es una brillante oportunidad para que la Cámara demuestre su dignidad y dé prueba de una auténtica independencia de poderes no siendo cómplice servil de los actos del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atanasof. — Señor presidente: hace unos días expresamos en esta Cámara nuestra profunda preocupación por los decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo nacional había dictado. Y en esto creo que hemos coincidido casi todos. Algunos diputados del bloque oficialista hicimos nuestra presentación propiciando la derogación del decreto 773/96, y debo recordar al señor diputado Pernasetti que la Unión Cívica Radical también lo hizo. Hay un proyecto de ley suscrito por la señora diputada Elisa Carrió, que propicia declarar la nulidad absoluta e insanable, y rechazar por inconstitucionales los decretos de necesidad y urgencia 770, 771, 772 y 773, dictados por el Poder Ejecutivo nacional.

También quiero recordar a la señora diputada Mary Sánchez que hay un proyecto de declaración por el que se vería con satisfacción que el Poder Ejecutivo anule los decretos 770 y 733, publicados en el Boletín Oficial, que fue presentado por los señores diputados Alfredo Villalba, Héctor Polino, Rodolfo Rodil y Mary Sánchez.

Recuerdo que hubo una coincidencia absoluta en las distintas expresiones políticas de esta Cámara en el sentido de derogar estos decretos. Además, en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social...

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia desea saber si el señor diputado concede las interrupciones que están solicitando la señora diputada Sánchez y el señor diputado Alsogaray.

Sr. Atanasof. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Sánchez. — Señor presidente: no dije que no habíamos llevado adelante esa propuesta; no es ésa la discusión. Lo que ocurre es que se está confundiendo la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia del Poder

Ejecutivo con el tratamiento de un proyecto que pretende privar a los trabajadores de un derecho remuneratorio.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: es normal que frente a ainsiones tan claras como las realizadas por el señor diputado Barrionuevo se brinde la respectiva respuesta. De todos modos advierto que no he de distraer por mucho tiempo la atención de la Honorable Cámara.

Aclaro que la historia que el señor diputado ha referido en relación con mi vida pública es un poco distorsionada. Por ello tendré que resignarme a enviarle un libro de mi autoría sobre mis cincuenta años de experiencia política y económica argentina; tal vez de ese modo modifique su forma de pensar.

No obstante lo señalado, entiendo que el problema se origina en otras cuestiones. Entre ellas está el hecho de que el diputado Barrionuevo está teniendo que hacer a la fuerza algo que es contrario a lo que antes defendió. En otras épocas estatizaron los ferrocarriles y ahora los tienen que privatizar; en otras épocas estatizaron los teléfonos y también ahora deben privatizarlos; antes había que planificar todo, incluso la vida de los habitantes —sobre todo la de los opositores—; ahora hay libertad completa.

Podría seguir enumerando cuestiones que demuestran cómo las nuevas ideas en vigencia han obligado indirectamente al señor diputado —no lo hemos forzado a ello— a votar normas que jamás soñó que iba a apoyar. Probablemente éste sea el motivo de la inquina que siente con respecto a quienes como yo, siempre hemos defendido las ideas que él ahora se ve obligado a apoyar, aunque no le haga honor al sector que representa.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia desea saber si el señor diputado por Buenos Aires concede la interrupción que solicita el señor diputado Barrionuevo.

Sr. Atanasof. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Barrionuevo. — Señor presidente: en primer lugar quiero informarle al señor diputado Alsogaray que sí he leído su libro, pues he comprado todos los que ha publicado. De igual manera he leído a Jauretche cuando, en una revista de la década del 60, le decía a este señor todo lo que pensaba, aunque él nunca le contestó.

En segundo lugar, aclaro que no cargo con culpa alguna, porque no apoyé nada de lo que el señor diputado mencionó.

Por último, corresponde aclarar que estatización y nacionalización son cosas distintas. Por otra parte, tendríamos que reubicarnos en los tiempos de la Argentina a fines de al II Guerra Mundial y analizar el problema de la libra esterlina y del dólar de ese entonces, cuestión que el señor diputado Alsogaray acalló toda su vida.

Lo que sí sé es que el mencionado legislador no tiene autoridad moral para referirse a mí.

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atanasof. — Señor presidente: en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social se discutió el tema profundamente, pero contra reloj, porque la realidad argentina nos imponía tener que resolver el conflicto planteado con las asignaciones familiares. Por supuesto, en el marco de esas consideraciones también tuvimos en cuenta, desde el punto de vista conceptual, el carácter remunerativo o no de los vales de comida.

Sin ninguna duda, en la mayoría de la comisión primó un criterio basado en la realidad que estamos viviendo en la Argentina, que nos indica que el nivel de operaciones en materia de vales de comida es del orden de los 1.300 millones de pesos; que este beneficio comenzó a aplicarse a partir de 1989 y que dentro de este sistema hay más de un millón de beneficiarios, generalmente trabajadores de bajos ingresos. Los directores y los ejecutivos de las empresas seguramente tienen otro mecanismo de compensación; a ellos no se les expenden vales de comida por valor de 90, 100 o 150 pesos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaklo Pierri.

Sr. Atanasof. — Por otra parte, son 20 mil las empresas que utilizan este servicio. Generalmente se trata de pequeñas y medianas empresas, las que en más de una oportunidad han sido objeto de preocupación de todos quienes integramos esta Cámara. Finalmente, nos importaba destacar que las empresas de vales de comida agrupan aproximadamente a 1.500 trabajadores.

Lo cierto es que, a raíz de estos decretos de necesidad y urgencia, el sistema de vales de comida virtualmente había desaparecido en nuestro país. Los sectores empresariales ale-

(Continúa en la segunda parte.)

gaban que el aporte que tenían que hacer como consecuencia de esos decretos no les resultaba rentable; consecuentemente, quienes terminaban siendo receptores de estas políticas en sus bolsillos, precisamente, eran los trabajadores de menores recursos. Frente a ello existía otro tema para resolver, que es el que a continuación se considerará: las asignaciones familiares.

Era necesario entonces encontrar algún mecanismo que pudiera financiar un régimen de asignaciones familiares que, quizá sin ser óptimo, de alguna manera mejorara el sistema establecido en el decreto de necesidad y urgencia. En esa dirección y en el marco de un extenso debate en el seno de las comisiones, se decidió establecer para los vales de comida una contribución exclusivamente patronal —remarco esto último—, que permitiera generar los recursos necesarios para que el régimen de asignaciones familiares pudiese cerrar con mejoras sustanciales respecto del régimen establecido en el decreto de necesidad y urgencia.

Por lo tanto, no creemos conveniente ni necesario profundizar el debate habido en el seno de las comisiones. Entendemos que estos temas han sido suficientemente discutidos, al margen de que probablemente diputados de algunos bloques de la oposición formulen algunas sugerencias respecto del dictamen de comisión. Por lo tanto, en nombre de los integrantes de la comisión que pertenecemos al bloque de la mayoría, reitero la exhortación de votar favorablemente el dictamen en consideración. De esta manera, por un lado podremos hacer una contribución para resolver el conflicto que se plantea con el régimen de asignaciones familiares y, por otro, permitiremos a los trabajadores de bajos ingresos seguir percibiendo, aunque sea temporariamente, este beneficio hasta que logremos crear una pieza legislativa que incorpore la totalidad de los gravámenes otorgándoles carácter remuneratorio.

Lo cierto es que hoy debemos resolver una situación coyuntural. Son muchos miles de argentinos los que este fin de mes se han visto privados de recibir estos vales de comida que sin ninguna duda contribuían al sustento familiar.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Alsogaray en el sentido de que el dictamen en consideración vuelva a comisión.

— Resulta negativa de 83 votos; votan 153 señores diputados sobre 158 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Se va a votar en general.

Antes de que el cuerpo se pronuncie quiero recordar que una mayoría especial de dos tercios por la afirmativa garantiza que, para que el Senado insista en su sanción, deba hacerlo también con las dos terceras partes de los votos de sus integrantes. Formulo esta aclaración a efectos de que los diputados que no están presentes se incorporen a la brevedad posible a sus bancas.

Sr. Matzkin. — No es así, señor presidente. No asuste a los diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — No los asusto; sólo quiero que esto quede claro para que después no haya ningún problema con el Senado.

Sr. Matzkin. — La votación puede hacerse por simple mayoría, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Así es, señor diputado; me he limitado a aclarar la conveniencia de obtener la aprobación del proyecto con las dos terceras partes de los votos emitidos. Por eso, y adelantándome a los hechos, es necesario llamar a los diputados que no están presentes.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 78 votos; votan 154 señores diputados sobre 159 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En virtud de que se han producido cuatro abstenciones que pueden llegar a incidir en el resultado final, se va a votar nuevamente en forma nominal.

Sr. Flores. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: deseo saber si no corresponde que a los efectos de esta nueva votación estén presentes los mismos diputados que intervinieron en la votación anterior.

Sr. Presidente (Pierri). — Debería ser así, señor diputado, pero la Presidencia se encuentra ante la imposibilidad de determinarlo, a no ser que el propio señor diputado me pueda decir quién estaba y quién no.

Sr. Flores. — Esa no es mi tarea, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Les recuerdo que los señores diputados que deseen abstenerse en esta votación deben solicitar permiso a la Presidencia.

Se va a votar nominalmente en general.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 161 diputados presentes, han votado 85 por la afirmativa y 72 por la negativa, no registrándose ninguna abstención. No se han registrado los votos de 3 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Aban de Abalos, Abasto, Acevedo, Alarcia, Alterach, Atanasof, Ayala, Barrios, Benzi, Bianculli, Bizzotto, Borda, Bordin, Britos, Cámara, Camaño, Cardoso, Carrara, Castillo (J. L.), Castro, Chica Rodríguez, Corchuelo Blasco, Das Neves, Dellepiare, Diaz Lozano, Domina, Domínguez (D. C.), Dragicevic, Drisaldi, Escalante Ortiz, Figueroa, Funes, Gazia, Golly, González (A.E.), González (M.L.), Granados, Guño, Haquim, Kessler, Lamberto, Leguizamón, Liponezky de Anavet, López (E. I.), López (J. A.), López Arias, Martínez (E), Matzkin, Maurette, Melogno, Migliozi, Miralles de Romero, Mondelo, Mondino, Mossello de Benzo, Müller, Obarrio, Parra, Pepe, Perini, Pezoa, Pichetto, Rampi, Robles, Rodríguez (M. E.), Roggero, Rojo, Roy, Rubco, Salim, Salto, Sampietro, Santander, Sat, Schiaretta, Serinuzzi, Soria (C. E.), Soria (E. V.), Speratti, Suárez, Tencv, Togni de Vely, Tulio, Veramendi y Vilche.

—Votan por la negativa los señores diputados Alessandro, Allende, Alsogaray, Aramburu, Baker, Barriomeu, Becerra, Bonomi, Bordenave, Bulacio, Bultrich, Caltrón, Callaba, Carea, Carrió, Cruchaga, Del Fábbo, Domínguez (L. S.), Duñon, Estévez Boero, Fabrissin, Fadel, Fernández, Fernández de Combes, Flores, Frago, Garré, Gatti, Gorini, Guevara, Gutiérrez (G. E.), Illia, Jaumarena, Juncosa, Martínez (M. L.), Mercader, Mercado Luna, Montiel, Muntel, Mussa, Neder, Negri, Nieva, Ocampós, Olina, Pando, Parentella, Pascual, Pasqualini de Acosta, Patterson, Peláez, Pellín, Pereyra de Montenegro, Pernasetti, Piñón Avila, Polino, Polo, Remedi, Rico, Roberti, Saggese, Sánchez, Sobrino, Solanas, Stubbins, Trettel Meyer, Viñaña, Vicchi, Viglione, Villalba, Viqueña, Zuccardi de Flamarique.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobado en general el proyecto de ley.

En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: quisiera saber si la comisión formulará alguna propuesta

en relación con el artículo 1º, que tiene la misma redacción que el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: proponemos la supresión del artículo 1º, por lo que el artículo 2º pasa a ser 1º y así sucesivamente.

Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, continuamos con la consideración del artículo 2º, ahora artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: queremos plantear algunas modificaciones a este artículo y a sus distintos incisos.

Por esta norma se agrega a la Ley de Contrato de Trabajo un artículo 103 bis, que define los beneficios sociales. Así se expresa: "Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero...".

Cuestionamos la expresión "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social" porque no entendemos qué quiere decir. ¿Qué son las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la seguridad social?

De acuerdo con la doctrina, la seguridad social tiene como fin propio la protección del hombre contra los riesgos o contingencias que puedan afectarlo desde su concepción hasta su muerte. Su objeto es crear en beneficio del hombre determinadas garantías que lo protejan ante las contingencias naturales de la vida. Cuando hablamos de beneficios sociales se trata de prestaciones del empleador que no siempre se relacionan con contingencias propias de la vida del trabajador, es decir que no tienen que ver con su nacimiento ni con las enfermedades ni con su muerte, sino que surgen de las propias necesidades de la empresa.

Por eso no se puede hablar de prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, porque si así fuera las jubilaciones también son parte de la seguridad social y por lo tanto caerían dentro del concepto de remuneración a los fines de los aportes jubilatorios. En función de lo expuesto proponemos la supresión de la expresión "naturaleza jurídica de seguridad social".

También vamos a formular objeciones en relación con otros incisos. Respecto del inciso a) que considera como beneficio a los servicios de comedor de la empresa, no formularemos ob-

servaciones. En cuanto a los vales del almuerzo, hasta el tope máximo por día de trabajo que determina el inciso b), tampoco formulamos objeciones, porque esto ha sido consagrado por el plenario número 264 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Manteniendo el criterio enunciado durante la consideración en general de esta iniciativa, nos oponemos al inciso c) en cuanto consagra como no remunerativos a los tickets y vales de canasta familiar.

Asimismo, teniendo en cuenta que el inciso d) alude a la expresión "farmacia habilitada", proponemos la supresión del vocablo "habilitada", porque para funcionar como tal la farmacia tiene que estar habilitada. No corresponde el uso de ese término, que, por otra parte, ha sido criticado por la doctrina.

También proponemos la supresión del inciso i), referido al comodato o locación de la casa habitación, porque tal como está redactada la disposición es contradictoria con el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo —que figura a continuación de este artículo en la iniciativa en discusión—, que determina que el salario puede ser abonado en dinero, especie, habitación, etcétera.

Más lógico sería considerar a las excepciones del inciso i) dentro del artículo 105 y consagrar solamente como no remunerativa a la vivienda que es alquilada por el empleador y no por el empleado.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Carca. — Señor presidente: voy a plantear una modificación en relación con el inciso f) del artículo 2º, donde dice: "Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilice la trabajadora con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones".

Con el afán de legislar igualitariamente sugiero el reemplazo de la palabra "trabajadora" por "trabajadores" para que el beneficio pueda ser gozado también por los trabajadores varones.

En nuestra sociedad, la crianza y la responsabilidad por los hijos deben ser compartidas entre varones y mujeres. Si legislamos en esta dirección estaríamos incorporando una medida de acción positiva para con los varones que les permitiría gozar de los beneficios de la guardería para el cuidado de su hijos en igualdad de derechos y responsabilidades con las mujeres.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. Borda. — La comisión no acepta lo planteado por el señor diputado Pernasetti en relación con la primera parte de este artículo, referido al artículo 103 bis.

Tampoco acepta las modificaciones propuestas a los incisos a), b) y c), pero sí acepta la sugerencia del diputado Pernasetti en relación con el inciso d), ya que considera sobrecabundante el término "farmacia habilitada", porque si la farmacia está funcionando es porque está habilitada. Es decir que en este caso se suprimiría la palabra "habilitada".

En el inciso f) la comisión acepta la propuesta formulada por la señora diputada Carca, de sustituir "utilice la trabajadora" por "utilicen los trabajadores".

En cuanto al inciso i), que dice: "El comodato de casa-habitación de propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda", la comisión acepta que se lo coloque en reemplazo del inciso d) —que desaparecería— del artículo 3º, que pasaría a ser 2º, que trata sobre el artículo 105 de la ley 20.744, referido al régimen de excepciones, tal cual lo propuso el diputado Pernasetti.

Finalmente, la comisión acepta la incorporación de un nuevo inciso, que sería el i), con el siguiente texto: "El pago de los gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados con comprobantes".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la supresión del artículo 1º y el artículo 2º —que pasaría a ser 1º— con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa de 87 votos; votan 154 señores diputados sobre 157 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 3º, que pasa a ser 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: por este artículo 2º se modifica el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y se incorporan algunos incisos. El inciso a) dice: "Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizadas en el balance". Es decir que se consideran prestaciones complementarias que integran la remuneración del trabajador todo lo que él percibe, salvo lo que se establece en los cuatro incisos del artículo.

A nuestro modo de ver, esta disposición es propia de la Ley de Sociedades Comerciales y no de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, planteamos su supresión.

Asimismo, sostenemos que debe eliminarse el inciso d), que dice: "Las sumas que se abonaren en conceptos de fallas de cajas a los cajeros y al personal cuya tarea habitual sea la de recibir cobranzas o la de efectuar pagos".

El adicional que se conoce como fallas de caja, evidentemente tiene un carácter remunerativo a los fines de la Ley de Contrato de Trabajo, no sólo para la seguridad social sino también para el cálculo de las vacaciones y de las indemnizaciones, así como de todo otro beneficio laboral. Esto ha sido reconocido unánimemente por la jurisprudencia. Por lo tanto, no puede figurar dentro de las excepciones, y entonces debe eliminarse.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta la supresión del inciso a) y sí la del inciso d), que es reemplazado por el texto que correspondía al inciso i) del artículo 103 bis en el artículo 2º —que pasó a ser 1º— del dictamen.

En consecuencia, el artículo 3º, con las modificaciones que hemos aceptado, ahora es el artículo 2º.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 3º, que pasa a ser 2º.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 143 señores diputados sobre 152 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el nuevo artículo 3º (4º del dictamen).

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente, por este artículo se agrega como artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente: "Artículo 223 bis: se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación..."

Esta modificación nos parece razonable y responde a la jurisprudencia vigente. Pero en la comisión se agregó un párrafo que dice: "Sólo tributarán las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661". Es decir que no

serán remuneratorias a los efectos de la seguridad social y del contrato de trabajo, pero sí a los fines de las obras sociales. Esto nos parece una contradicción: o son remuneratorias, o no lo son. En este último caso no pueden estar sujetas a ningún tipo de aporte, ni siquiera el relativo a la obra social. Por esa razón, proponemos que se suprima el último párrafo, que dice así: "Sólo tributarán las contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión no acepta las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 4º, que pasa a ser 3º.

— Resulta afirmativa de 82 votos; votan 149 señores diputados sobre 154 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 5º, que pasa a ser 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: este artículo establece una contribución patronal del 10 por ciento sobre el beneficio social indicado en el inciso c) del artículo 103 bis de la ley 20.744 con destino al sistema de asignaciones familiares.

Se dijo que los vales no tienen carácter remuneratorio para los trabajadores y que no van a ser computados a los fines de la seguridad social, el contrato de trabajo, las indemnizaciones, las vacaciones, etcétera, pero sí se va a establecer un gravamen del 10 por ciento con destino al sistema de asignaciones familiares.

Nosotros estamos en contra de esta disposición porque creemos necesario que las asignaciones familiares se financien con su propio sistema, establecido por la ley 18.017. No estamos de acuerdo con que se impongan nuevas contribuciones, pues tal como lo dispuso la OIT, deben ser conceptos salariales y remunerativos.

Por lo expuesto, votaremos por la negativa el artículo en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: para el artículo en consideración proponemos la siguiente redacción: "Establécese una contribución del 14 por ciento sobre los montos que sean abonados por los empleadores a sus trabajadores en vales alimentarios o cajas de alimentos expendidos o suministrados por parte de las empresas auto-

rizadas al efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y sobre los pagos de servicios médicos de asistencia o previsión que realice el empleador al trabajador y su familia a cargo.

"Esta contribución se encontrará a cargo de los empleadores y estará destinada al financiamiento del sistema de asignaciones familiares."

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 5º, que pasa a ser 4º.

— Resulta afirmativa de 83 votos. Votan 146 señores diputados sobre 156 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 6º, que pasa a ser 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti. — Señor presidente: no alcanzo a entender el sentido de este artículo 6º, que ahora pasa a ser 5º. Allí se dice que "los gastos en que el empleador incurra para el otorgamiento de los beneficios sociales indicados en los incisos b), d), f), g) y h) del artículo 103 bis de la ley 20.744, no podrán exceder el veinte por ciento (20 %) de la remuneración mensual...".

Si hemos establecido que esos beneficios no son retributivos, no se advierte por qué se encadena el porcentaje a la retribución normal y habitual, máxime teniendo en cuenta que el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente para afirmar la intangibilidad del salario y la libertad del consumo del trabajador, establece que las remuneraciones que se pacten en las convenciones colectivas deberán expresarse en su totalidad en dinero; y después hace referencia a las remuneraciones en especie, determinando que el empleador no podrá imputar los pagos en especie a más del 20 por ciento del total del salario.

Entonces, con esta doble fijación podría interpretarse que las asignaciones en especie, sean las salariales o las que hoy se llaman no retributivas, podrán llegar al 40 por ciento del salario.

Entiendo que habría que suprimir lisa y llanamente este artículo porque, si en el proyecto estamos diciendo que las asignaciones no son retributivas, no se advierte por qué tiene que haber una limitación como si el salario realmente fuera en especie, cuando ya el texto está señalando que los salarios en especie no pueden superar el 20 por ciento del total.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. González. — Señor presidente: de la lectura de este artículo surge una preocupación en cuanto a poner un tope del 20 por ciento al conjunto de estos beneficios adicionales, porque esto puede llegar a significar que algunos de los beneficios establecidos en el artículo 103 bis de la ley 20.744 tendrían que dejarse de lado, es decir, los medicamentos, útiles escolares, vivienda, compensación de gastos de salud, etcétera. Cuando uno de ellos excediera el 20 por ciento del salario, tendrían que dejarse de lado los otros, y ellos pueden ser los útiles escolares o el uniforme para el trabajador.

Es decir que si aquí se definen claramente cuáles son los beneficios sociales y por este artículo se pone una limitación, se estaría limitando a dichos beneficios sociales. Por lo tanto, entiendo que debe suprimirse este artículo del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: coincido con lo manifestado por los señores diputados preopinantes en el sentido de solicitar la supresión del artículo en consideración a que dice que los gastos en los que el empleador incurra para el otorgamiento de los beneficios sociales indicados en los incisos b) —vales de almuerzo—, d) —gastos de medicamentos—, f) —gastos de guardería— y h) —gastos de capacitación—, no podrán exceder el 20 por ciento de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, con exclusión de todo adicional variable, o el equivalente a cuatro AMPOS, lo que resulte menor.

Considero que relacionar los beneficios sociales con un porcentaje del salario significa violar expresamente lo establecido por el convenio de la OIT. Por lo tanto, de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales, esta norma será tachada de inconstitucional y originará litigios.

De todos modos, lo insólito es que se pretende fijar límites al otorgamiento de cursos o seminarios de capacitación o especialización, a pesar de que uno de los males que se atribuyen al mercado laboral es la falta de capacitación y competencia.

Si tomamos el caso de un trabajador que perciba un sueldo de 500 pesos, por beneficios sociales —incluyendo guardapolvos, servicios fúnebres, guarderías y vales de comida— no va a poder recibir más de 100 pesos porque de lo contrario tendrá que aportar el 17 por ciento sobre la diferencia. Ello significa que no podrá realizar ningún curso de capacitación.

Además, esta norma entra en contradicción con la ley de jubilaciones y pensiones que en el artículo 7º considera no remuneratorias las becas que se otorgan en beneficio del personal.

A pesar de que en todos lados se dice que los trabajadores deben capacitarse, aquí se está poniendo un tope a esa posibilidad. ¿Qué ocurrirá con aquellos trabajadores que requieren de una capacitación periódica para estar al tanto de las innovaciones tecnológicas? Por ejemplo, los pilotos de aeronaves se ven obligados en forma frecuente a realizar cursos de capacitación en el exterior cuyo costo es de 3 mil, 4 mil o 5 mil dólares. En este caso, el empleador aportará el 20 por ciento y la diferencia formará parte del salario. ¿Sobre ese monto tendrá que tributar el trabajador?

En virtud de la incoherencia que representa esta norma solicitamos que se eliminen los límites en los beneficios sociales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Sánchez. — Señor presidente: es del caso advertir que esta norma plantea una inseguridad jurídica para los trabajadores y originará litigios no sólo en el interior sino también internacionalmente, de acuerdo con lo señalado por el señor diputado Pernasetti.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: desearía aclarar a la Honorable Cámara que lo relacionado con la capacitación del personal ya ha sido resuelto con los miembros de la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Borda. — Señor presidente: en virtud de lo planteado por el señor diputado Gatti y otros señores diputados, la comisión acepta suprimir el artículo en consideración. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la supresión del artículo 6º del dictamen, que ha pasado a ser 5º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 7º del dictamen, que pasa a ser 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti. — Señor presidente: adviértase que se ha quitado el carácter de remuneración a muchos de los ítem que aquí se mencionan. Este artículo sólo se refiere a la obligación de mantener el servicio de ticket-canasta, sin ta-

ner en cuenta a los demás ítem considerados no retributivos, que se relacionan con una serie de servicios que actualmente están prestando las empresas.

Dado que a raíz de la decisión de la mayoría de esta Cámara esos ítem han dejado de formar parte del salario, el empleador graciosamente podría dejar de otorgar tales beneficios al trabajador; quien no tendría ninguna forma jurídica de peticionar por el hecho de sentirse agraviado por la supresión de uno de esos servicios.

Por lo expuesto, a efectos de ser coherentes, en el artículo 7º del proyecto se debería establecer que ninguno de esos servicios podrá dejar de ser prestado por los empleadores en los contratos de trabajo en vigencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: vamos a proponer una nueva redacción para el artículo en tratamiento, pues su texto actual implica lisa y llanamente ratificar el decreto 848/96, de necesidad y urgencia, dado que se obliga a los empleadores a seguir otorgando vales alimentarios o cajas de alimentos en los términos que se establecen; es decir, con aportes a la seguridad social pero sin ser considerados como beneficios laborales a los fines del contrato de trabajo.

Por lo expuesto, propongo que el artículo en consideración quede redactado de la siguiente manera: "Los empleadores que al 15 de julio de 1996..." — que es la fecha de dictado del decreto — "...venían otorgando vales alimentarios o cajas de alimentos a sus dependientes, están obligados a mantenerlos, pudiendo sustituirlos por su equivalente en dinero, debiendo efectuar sobre ellos las retenciones en concepto de aportes y las contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social".

Como dijimos, los vales son remuneración. Se dice que al cargar las contribuciones a los trabajadores les estamos disminuyendo el salario, pero ello no es tan así; si les damos el carácter de salario, el incremento en vales va a ser computado a los fines del aguinaldo, de las vacaciones, de la jubilación y de todos los demás beneficios que surgen del contrato de trabajo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión ha previsto la modificación de este artículo, cuyo

texto curiosamente concuerda con lo que ha planteado el señor diputado Gatti.

La redacción que proponemos es la siguiente: "A partir de la fecha de vigencia de la presente ley los empleadores que venían otorgando beneficios sociales conforme al artículo 103 bis de la ley 20.744, deberán mantenerlos en los términos aquí establecidos".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 5º, antes 7º, según el texto que acaba de leer el señor diputado Borda.

— Resulta afirmativa de 106 votos; votan 147 señores diputados sobre 156 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 6º del dictamen, 8º del proyecto aprobado en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: propongo que este artículo tenga la siguiente redacción: "El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, podrá excluir de los topes establecidos en el artículo 5º a los beneficios sociales referidos en el inciso d) del artículo 103 bis de la ley 20.744, cuando existiesen gastos médicos o farmacéuticos extraordinarios del trabajador o de su familia a cargo, que el empleador asuma por razones humanitarias".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: se sobreentiende que lo que nosotros dispongamos no va a tener efecto retroactivo. Ahora bien, todos los trabajadores que cobran sus salarios mensualmente sufrieron la eliminación de los tickets-canasta y su importe lo han retenido las empresas. Quisiera saber qué va a pasar con eso, cómo se va a resolver, porque es algo que ya pasó con las ART, cobrándose sobre un mes en el que no se prestaron servicios y quedando en definitiva ese importe en manos del Estado.

El planteo que nosotros hacemos a las empresas es que se devuelva a los trabajadores el dinero que se les retuvo, el día 30, en el caso de quienes cobran sus salarios mensualmente, y que mañana no efectúen ninguna retención a los jornalizados. Esa es la inquietud que tengo.

Sr. Presidente (Pierri). — Posteriormente le daré la palabra al señor miembro informante para que haga la correspondiente aclaración.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. González. — Señor presidente: no tengo el texto en mi poder, pero he oído que se hace re-

ferencia a una excepción a las limitaciones establecidas en el artículo 5º. Pero como acabamos de resolver la supresión de ese artículo, no tendría sentido establecer limitaciones de algo que se ha dejado de lado por una decisión de esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: en la lectura efectuada en nombre de la comisión se habla del artículo 5º, cosa que no tiene razón de ser porque ese artículo ha sido suprimido.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Borda. — Señor presidente: ante el planteo efectuado por el señor diputado Brunelli debo decir que el decreto está en vigencia. Hubo aclaraciones del Poder Ejecutivo por medio de diferentes integrantes del gabinete nacional en el sentido de que se debían realizar los descuentos más allá de lo que podamos pretender gremialmente.

Con respecto a lo que han planteado los señores diputados González y Pernasetti tengo que aclarar que no nos habíamos dado cuenta de la supresión que habíamos efectuado anteriormente. En razón de ello aceptamos la sugerencia de suprimir el artículo 6º, antes 8º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: quiero señalar que el artículo 8º del dictamen, que pasaría a ser 6º y que se propone suprimir, dice lo siguiente: "Deróguense los decretos 773/96, y 848/96 y 849/96." Por lo tanto, estimo que debería votárselo en su redacción original.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Borda. — Señor presidente: en razón de lo expuesto por el señor diputado preopinante la comisión va a retirar la propuesta de supresión del artículo 6º, antes 8º. En consecuencia, vamos a proponer que se mantenga la redacción de dicho artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Lahoz. — Señor presidente: descartaría que la comisión adopte una postura con respecto al planteo efectuado por el señor diputado Brunelli. Se trata de fondos retenidos en las empresas a la espera de lo que aquí se resuelva. Y esto no puede quedar supeditado a lo que diga el Poder Ejecutivo. No dar una respuesta desde el Congreso a 3 millones de trabajadores es una barbaridad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Brunelli. — Señor presidente: voy a proponer una solución salomónica. Los patrones retuvieron a sus empleados el 11 por ciento de los tickets para las AFJP y un 6 por ciento más por otros conceptos. Esa fue la única retención. En consecuencia, como los empleadores no aportaron el 20 por ciento que establece la ley, y les retuvieron a los empleados el 17 por ciento, nosotros proponemos que ese 20 por ciento ingrese al Estado y el 17 por ciento se devuelva a los trabajadores.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Sánchez. — Señor presidente: apoyo la propuesta del señor diputado Brunelli. Esta era nuestra intención para los tickets en general y no sólo para esta oportunidad. Luego de la aprobación del artículo 8º, ahora 6º, que contempla la derogación de los decretos, correspondería la inmediata devolución de las retenciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: cuando propuse las modificaciones al artículo 6º, enuncié claramente que para evitar los problemas planteados por el señor diputado Brunelli había que establecer que los empleadores que al 15 de julio de 1996 venían otorgando vales alimentarios o cajas de alimentos a sus dependientes debían mantenerlos. El 15 de julio era la fecha en que se dictó el decreto. Si no consideramos esta fecha y tomamos el momento en que se sanciona esta ley, existirá todo un lapso en el que los decretos tendrán validez y ello ocasionará un perjuicio a los trabajadores. De allí resulta importante que en la iniciativa se coloque la fecha a partir de la cual los empleadores están obligados a mantener los beneficios.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Rojo. — Señor presidente: me parece que la propuesta del señor diputado Brunelli debería contemplarse mediante la inclusión de un nuevo artículo a posteriori del último que figura en el proyecto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: nosotros hemos escuchado a compañeros de nuestra bancada. Aquí no existe insensibilidad y debe tratarse de entender la situación. Hace quince días quisimos considerar esta norma, lo que consta a todos los presentes.

Creo que lo que se propone es factible, pero debe concretarse a partir de otro proyecto de ley. Habrá que redactar una nueva norma le-

gal. Quiero ser práctico: hemos logrado un consenso para posibilitar que la iniciativa se convierta en ley.

No desconocemos lo planteado por el señor diputado por Corrientes. Pertenecemos a organizaciones sindicales y, por lo tanto, conocemos la situación. Hemos brindado la explicación correspondiente, y creo que no estamos equivocados. No decimos tozudamente que no, sino que hemos acordado para posibilitar la sanción de la norma y paliar una situación absolutamente negativa, que existe a partir de un decreto de necesidad y urgencia dictado por nuestro gobierno. Presentemos un nuevo proyecto para contemplar la situación que se ha mencionado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va votar el artículo 6º, antes 8º, tal como figura en el proyecto de ley aprobado en general.

— Resulta afirmativa de 111 votos; votan 138 señores diputados sobre 163 presentes.

— El artículo 7º, antes 9º, es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Habiéndose introducido modificaciones al texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.¹

Se va a votar un pedido de inserción que el señor diputado Pernasetti hizo llegar a la Presidencia.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda autorizada la inserción solicitada.²

22

REGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES

(Orden del Día Nº 501)

I

Dictamen en mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Familia, Mujer y Minoridad y de Legislación del Trabajo han considerado el mensaje 280 y proyecto de ley de Reforma del Régimen de Asignaciones Familiares; mensaje 774 acompañando copia autenticada del decreto 770 del 15-7-96, sobre reforma a la Ley Asignaciones Familiares para trabajadores que presten servicios en la actividad privada y para beneficiarios del Sistema Inte-

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 3239.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 3333.)